BIBLIOTECA DIGITAL
DEL SOCIALISMO CHILENO

DIÁLECTICA DE UNA DERROTA I

CARLOS ALTAMIRANO ORREGO

SIGLO XXI EDITORES,SA
MEXICO 1978

INDICE

INTRODUCCIÓN

1. EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Un partido singular
Un largo camino de maduración
Aportes al debate teórico
La línea de «Frente de Trabajadores»
Vigencia histórica del socialismo chileno

2. LA UNIDAD POPULAR: UN PROGRAMA PARA CHILE

Tres documentos claves
El programa de la UP
Un vacío inexcusable

3. LOS MIL DÍAS DE LA UNIDAD POPULAR

4. LA VÍA PACÍFICA Y EL PROCESO REVOLUCIONARIO

La vía: ¿problema táctico o estratégico?
Vía pacífica y vía armada
La estrategia del movimiento popular
El enfrentamiento insoslayable
Viabilidad de una estrategia armada

5. LAS DIFÍCILES CAPAS MEDIAS

Presencia política de las capas medias
Su sistema ideológico
Insuficiencias de una política
La pequeña burguesía y el Gobierno Popular

INTRODUCCIÓN

Se extinguía el 4 de septiembre de 1970. El pueblo se había volcado sobre la alameda Bernardo O'Higgins, arteria principal de Santiago, para celebrar una victoria que por largas décadas se había mostrado esquiva. Allende era virtualmente el presidente de Chile, aunque el gobierno de Frei dilataba mañosamente el reconocimiento oficial de los resultados electorales. Trabajadores, jóvenes estudiantes, mujeres de las poblaciones marginales y campesinos de la periferia. capitalina, explosionaban sobre la ancha avenida, el júbilo del vasto movimiento popular triunfante. La burguesía amedrentada, intoxicada por su propia propaganda, se había parapetado en sus mansiones, aguardando el asalto de las turbas vencedoras. La culpa acumulada en siglo y medio de dominación y explotación, oscurecía y silenciaba los barrios elegantes.

Aquélla fue una noche de alegría larga. El pueblo cantó y bailó hasta avanzada ya la madrugada. Ni un solo vidrio se quebró en Santiago. Ni una sola bofetada castigó la arrogancia replegada del enemigo derrotado. Los trabajadores se asomaban a su destino con una increíble demostración de generosidad y madurez cívica.

Casi exactamente tres años después, cuando también se apagaba otro día de septiembre, la burguesía alborozada bebía champagne en sus lujosos salones. Allende había sido asesinado y se clausuraba brutalmente la vibrante experiencia que él encabezara. La soldadesca, inoculada de odio, irrumpía en los hogares populares, y allí destruía, robaba, violaba y asesinaba, mientras el pijerío ebrio delataba, golpeaba y colaboraba en la tarea de exterminio.

Cuando septiembre fue del pueblo, los partes policiales no registraron un solo desmán. Cuando fue de la burguesía, murió ensombrecido por el hedor de 40 mil cadáveres. El terror rojo, persistentemente anunciado por los heraldos de la burguesía, no se asomó entonces ni en los tres años subsiguientes. El terror blanco, en cambio, vino sin anuncio y su faena nunca se dio pausa después de la derrota popular. Dos estilos de vida, dos concepciones diferentes de la sociedad y del hombre. Una, la del pueblo, alegre, generosa, abierta a la esperanza de una vida superior; otra, la de sus adversarios, torva, deshumanizada, implacablemente resuelta a defender sus privilegios.

El examen de los dos proyectos sociopolíticos que emergen de aquellos aconteceres, el intento de construir una sociedad socialista, en pluralismo, en democracia y en libertad, y la experiencia fascista, que metodiza la destrucción de un vasto sector social para afincar el dominio burgués imperialista, constituyen el objetivo central de este libro.

El está escrito para satisfacer una urgente necesidad personal y partidaria, a la vez que una apremiante exigencia revolucionaria. Desde la dirección del más poderoso partido de la Unidad Popular, jugamos un importante papel en el quehacer convulsionante de los últimos años. Ello nos impuso la obligación de ir recogiendo las interrogantes variadas que emergieron del desenlace trágico. Deseamos, en estas páginas, dar a ellas una respuesta directa y categórica, desde nuestra perspectiva. Comprendemos las dificultades y asumimos plenamente los riesgos. El triunfo electoral de un movimiento marxista, en un país pequeño, dependiente y subdesarrollado, es un hecho excepcional en la historia; el desarrollo posterior del proceso y su subsiguiente fracaso, crearon incógnitas complejas, difíciles de desentrañar.

Premeditadamente habíamos eludido enfrentar esta tarea sin contar con una perspectiva histórica adecuada y sin la serenidad indispensable para liberar el análisis de cualquier interferencia subjetiva y emocional.

Creemos que ya ha trascurrido el tiempo suficiente como para encarar esta exigencia. Entendemos insoslayable la obligación de hacer llegar nuestro pensamiento a los combatientes, que desde todos los rincones de los caminos revolucionarios, hurgan en la experiencia chilena las lecciones inapreciables que emergieron de su victoria y derrota.

Con posterioridad al golpe militar, empezó a proliferar en Europa y en América Latina, una profusa literatura analítica en tomo a las cuestiones fundamentales planteadas por nuestra singular experiencia. Ello no es extraño. Pocos hechos, en lo que va del siglo, han impactado tan violentamente a la opinión pública mundial. Pocas veces, el movimiento revolucionario internacional había formulado con tan vehemente severidad el cuestionario de sus dudas:

¿Qué factores determinaron la derrota? ¿Cuál fue la magnitud y la entidad de los errores cometidos? ¿Qué desviaciones lo obstaculizaron y sobre qué «fichas ideológicas» deben éstas ser imputadas? Y por cierto, como cuestión sustancial, ¿estaba o no la derrota fatalmente determinada por la singularidad misma de la vía, en apariencia divorciada de la ortodoxia?

Las respuestas ensayadas han entregado un aporte valioso al debate promovido. No obstante, en no pocas de ellas, se ha incurrido en errores determinados por perspectivas inadecuadas. Existe, a nuestro juicio, tendencia « magnificar factores adjetivos del proceso, a los cuales se atribuye un peso específico, casi excluyente. Para algunos, la suerte de aquél, aparece sellada pura y simplemente por la decisión voluntariosa del imperialismo de hacerlo abortar. Para otros, estaba condenado por la incapacidad de la dirección revolucionaria, para articular, política y socialmente, un entendimiento con los sectores medios, que evitara el aislamiento del proletariado. Hay también, quienes buscan el nudo de la trama en el ritmo impuesto a la experiencia, lento para montescos, vertiginoso para capuletos.

No pocos aparecen orientados, más que a profundizar objetivamente en la realidad íntima del drama chileno, a satisfacer determinadas posiciones partidistas o doctrinarias. Finalmente, algunos juicios críticos se expresan a contar de moldes ya utilizados o de experiencias ya vividas, con los cuales se pretende establecer analogismos mecánicos.

Entendemos por cierto, que todo proceso social se descompone en una multiplicidad de factores y está condicionado por un cúmulo de circunstancias y situaciones que lo explican. Despejar lo que hay de esencial y

coherente, en la tupida red de hechos intrascendentes, aleatorios o marginales, sólo es posible a partir de la ponderación objetiva de cada realidad concreta. Sin el conocimiento cabal de ésta, se trabajará inevitablemente con categorías extrañas, que en definitiva, oscurecerán una visión integral del fenómeno analizado.

La realidad sobre la que se construyó el triunfo de la Unidad Popular en Chile, y que abrió las compuertas de un proceso revolucionario inédito, es desde luego, una realidad específica, con la cual no resulta fácil establecer marcos analógicos. Aquella victoria no fue en modo alguno un regalo caprichoso de la historia. Está construida sobre supuestos sociales, políticos e ideológicos consolidados en años de lucha. Hay tras ella una larga evolución histórica, cuyas características explican la posibilidad de una empresa, que no pudo intentarse en ningún otro país de América. Son las condicionantes del desarrollo del movimiento popular chileno, las que determinarán en estricta relación de causas y efectos, la naturaleza de la victoria de 1970, y la fisonomía singular de la experiencia revolucionaria inaugurada con ella.

Nos parece fundamental, por todo ello, diseñar el escenario político y social en el que ha decurrido el acontecer del último lustro. A partir de él, podemos entregar una visión objetiva de la experiencia que vivimos, despojándola de causas y efectos meramente circunstanciales. Sin ignorar la urdimbre de factores que intervinieron en la emergencia política que culminó en septiembre de 1973, intentamos aislar en ella los principales acontecimientos y problemas teóricos que pone de manifiesto.

En esta perspectiva, hemos eludido la relación cronológica, pormenorizada y descriptiva de las circunstancias que confluyeron en el proceso. Hemos evitado del mismo modo todo lo que pudiera tener un carácter autobiográfico. El material para ello no es desestimable. El autor como jefe del más importante partido de gobierno, vivió la intimidad de los hechos más trascendentes de los últimos años. No obstante, no se trata aquí de hacer historia. Pensamos, tal vez, haya más tarde oportunidad para ello.

Llamará la atención el que ciertos conceptos y afirmaciones aparezcan reiterados en diversos capítulos de esta obra. Así lo hemos querido. Al elaborarla, apenas si hemos dispensado alguna preocupación por las normas técnico-literarias. Hay, sí, una voluntad muy resuelta de «impregnar» al lector de ciertas ideas que nos parecen medulares. Después de todo, el autor no es un escritor ni un ideólogo, sólo es militante de un partido revolucionario, cuyo pensamiento y posiciones son las resultantes de una vivencia protagónica en el acontecer chileno. Este libro es virtualmente «un cuaderno de anotaciones», en el que se han volcado -si se quiere en desorden- reflexiones y juicios intensamente vividos y profundamente meditados.

No pretendemos que las conclusiones inferidas del análisis de la experiencia chilena, tengan validez más allá del ámbito de nuestra realidad nacional. Por cierto, hay lecciones profundas que deberán enriquecer el acervo teórico-político de movimientos revolucionarios de otras latitudes, del mismo modo que determinadas opciones estratégicas, clausuradas por el imperialismo para Chile y el continente, continuarán siendo factibles en el acontecer de otros pueblos.

No intentamos en este ensayo un estudio exhaustivo de la experiencia fascista que emerge tras el asesinato de Salvador Allende. Creemos que la opinión pública universal -quizá con la sola excepción de la de Chile- ha tenido acceso a una amplia información acerca de la magnitud de sus crímenes, torpezas y horrores. El lector sólo encontrará una descripción global de la asombrosa empresa de demolición dirigida por la pandilla usurpadora. Sobre su faena destructora nos limitamos a repetir con Saint Just: «Han sido tan malvados cuanto su estupidez se los ha permitido.» No obstante, nos ha interesado llamar la atención sobre las características del régimen tiránico que hoy oprime a nuestra patria, en cuanto proyecto político y opción estratégica, seleccionada por los Estados Unidos y las grandes empresas trasnacionales, para estabilizar su dominio en América Latina.

Este libro ha sido escrito en una perspectiva de franqueza. Nos parece que a esta altura, enfrentados a la inmensa tarea de rescatar a Chile de la barbarie, podemos y debemos asumir el riesgo de la franqueza. La crítica y la autocrítica imponen una obligación ineludible a la vez que un derecho irrecusable. Cumplimos esa obligación y ejercemos ese derecho, entregando en las páginas siguientes el pensamiento de un combatiente socialista chileno, como simple aporte a un debate, que permanecerá por largo tiempo abierto.

1. EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

En los últimos años del siglo pasado, el joven proletariado chileno empieza a dar consistencia orgánica a sus luchas. Las ideas socialistas se habían deslizado desde la vieja Europa y encontrado oídos atentos y receptivos, especialmente entre los trabajadores de las áridas regiones norteñas. La maduración en todo caso será lenta y difícil.

Es en el norte del país -poseedor de las grandes riquezas salitreras- donde se generan las condiciones y el clima humano adecuado para el parto de la primera organización política de los obreros de Chile. Allí emerge también el constructor visionario, cabeza de la magna empresa. Organizador infatigable y sembrador generoso, se dio de inmediato a la tarea de vertebrar nacionalmente, las inquietudes y rebeldías que afloraban en la larga geografía. En 1912, Luis Emilio Recabarren, padre del movimiento obrero chileno, fundó el Partido Obrero Socialista (POS).(1)

En 1915, cuando la primera guerra mundial imperialista devastaba Europa, el POS se estructura en todo el país como la única vanguardia política del proletariado chileno. Muy pronto, los resplandores de octubre iluminarían las esperanzas de la humanidad postergada. Cuando nace la III Internacional -respuesta histórica al reformismo expresado en la Internacional Socialdemócrata- el partido de Recabarren se convierte en su sección chilena con el nombre de Partido Comunista de Chile. Bajo su alero inspirador, la joven organización obrera suscribirá sus lineamientos y conducta. La apreciación de la III Internacional -en 1929- sobre el carácter de la crisis mundial y su política beligerante frente a los sectores reformistas, se traduce en el Pe en un dogmatismo practicante, que termina por debilitar su crecimiento.

Al iniciarse la década del treinta la gran masa de los trabajadores no obedecía a dirección política alguna. No la ubicaba ni en el P.C. ni en su escisión trotskista. La única entidad nacional sindical, la Foca, adherida también a la III Internacional, apenas si logra una precaria representatividad.(2)

Las dramáticas exigencias planteadas por la crisis mundial, genera fragmentadas organizaciones en busca de una respuesta conduccional. Así, en la perspectiva de construir una vanguardia revolucionaria, nacen la Nueva Acción Pública (NAP), el Partido Socialista Marxista, la Acción Revolucionaria Socialista (ARS), la Orden Socialista, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Socialista Unificado y otros grupos. En ellos militan hombres destacados, tanto en las asambleas estudiantiles, centros efervescentes de importantes sectores de la pequeña burguesía, como en las agitadas luchas obreras: Oscar Schnake, Marmaduke Grove, Eugenio Matte, Eugenio González, Salvador Allende, Augusto Pinto, Carlos Alberto Martínez, obreros los dos últimos, todos de antigua y combativa trayectoria.

Sobre estas organizaciones y bajo la conducción de estos revolucionarios se construye más tarde el Partido Socialista de Chile. La crítica situación económica, la anarquizante coyuntura política y la creciente movilización de las masas, los lleva a plantearse -prematura y románticamente- nada menos que la conquista del poder. La resuelta determinación de algunos sectores de las fuerzas armadas permitirá cristalizar esta aspiración.

El 4 de junio de 1932 nace en Chile una «República Socialista», engendrada por la audacia, el coraje y el idealismo. Sólo sobrevivirá doce días, suficientes para despertar en las masas una voluntad de poder y convencerlas acerca de la necesidad de contar con una poderosa vanguardia orgánica.

Será precisamente un militar quien jugará un papel protagónico en aquella aventura: el comodoro del Aire, Marmaduke Grove Vallejo. Sus posiciones políticas habían encontrado profundo eco en los sectores más avanzados de las fuerzas armadas. Más tarde se convertiría en el líder nacional de un vasto movimiento popular de cuyo seno emergería el Partido Socialista de Chile.

Aquel episodio de la historia nacional, despreciado por los historiadores reaccionarios, despojado de sus causas y efectos circunstanciales y más allá de la inspiración voluntarista de sus ejecutores, sacudió profundamente la conciencia popular. Las decisiones revolucionarias adoptadas al calor de una voluntad creadora pusieron en contacto práctico a los trabajadores chilenos con la irrecusable justicia del socialismo y abrieron un ancho cauce donde confluirían las inquietudes socialistas, hasta entonces dispersas.

La experiencia fugaz no se extingue en el fracaso. Sus conductores entendieron que éste era históricamente inevitable. El golpe temerario abrió hermosas expectativas, pero no estaba afincado en las masas, ni existía tampoco el partido vanguardia, capaz de consolidarlas.

Los vacíos evidentes apuraron la respuesta a este urgente requerimiento social: nace así el 19 de abril de 1933, el Partido Socialista de Chile.

UN PARTIDO SINGULAR

El Partido Socialista emerge a las luchas políticas y sociales, definido por características únicas y singulares. Estos rasgos lejos de diluirse en el trascurso de su dilatada evolución, se acentuarán hasta diseñar una personalidad política e ideológica difícilmente identificable con la de otros partidos adscritos al movimiento comunista; integrantes de la Internacional Socialista, o fuerzas independientes del movimiento revolucionario latinoamericano.

Nace y se desarrolla como un partido revolucionario. En su gestación confluyen las más variadas corrientes del pensamiento progresista de la época, que no obstante aceptar con reservas el marxismo, se confunden sustancialmente en una común orientación revolucionaria y antimperialista. En la Declaración de Principios, aprobada en su primer Congreso, establecía: que acepta «el marxismo como método de interpretación de la realidad, enriquecido y rectificado por todos los aportes científicos del constante devenir social'; reconoce la lucha de clases; preconiza la instauración de «la dictadura de los trabajadores organizados»; define el carácter de clase del Estado; y

adhiere al internacionalimo proletario, expresado en el continente, en una «Federación de Repúblicas Socialistas». Este mismo documento, enfatiza ya en esa época acerca de la inviabilidad de un tránsito pacífico al socialismo, toda vez «que la clase dominante ha organizado cuerpos civiles armados y erigido su propia dictadura con el fin de mantener a los trabajadores en la miseria e impedir su emancipación».

La dispersión ideológica de los primeros años, lejos de atomizarlo como alternativa política coherente o de arrastrarlo a posiciones reformistas, destino invariable de los movimientos populares latinoamericanos nacidos bajo similar signo, irá siendo progresivamente superada.

Receptivo a las influencias de las diferentes corrientes del pensamiento marxista revolucionario, fue al mismo tiempo obstinadamente refractario al efecto «colonizador» de tales tendencias. Nunca aceptó vaticanos ideológicos.

El vigoroso ascenso de la clase obrera en los últimos cuarenta años, la insurgencia combativa del campesinado, el desarrollo unitario del movimiento sindical, las acciones reivindicativas de estudiantes y pobladores, acusan la presencia consecuente del PS y su extrema sensibilidad frente a las variadas manifestaciones de la lucha de clases. Es pues, en esencia, un partido de masas. En ninguna etapa de su vida permanece como un grupúsculo revolucionario desligado de los trabajadores ni como expresión académica y elitista de sectores radicalizados de la pequeña burguesía. Enraizado profundamente en las masas, su política ha expresado las aspiraciones revolucionarias del pueblo chileno.

Desde su nacimiento, y este es otro de sus rasgos característicos, mostró una irrenunciable vocación latinoamericanista. Mucho antes del ejemplo magnífico de la Revolución cubana, entendió que el desarrollo de los movimientos revolucionarios en América Latina, no era factible desde posiciones autárquicas y que existía una ligazón sustancial que hacía interdependientes sus destinos. Mantuvo invariablemente una concepción «bolivariana» de las luchas independentistas continentales, ubicando el centro de su quehacer político en Chile y en América Latina. Esta vocación latinoamericanista se expresa clara y resueltamente en la ya mencionada Declaración de Principios: «La doctrina socialista es de carácter internacional y exige una acción solidaria y coordinada de los trabajadores del mundo. Para realizar este postulado, el PS propugnará la unidad económica y política de los pueblos de Latinoamérica para llegar a la Federación de las Repúblicas Socialistas del Continente.»

Por ello, valoré al avance implícito en los movimientos nacionalistas y populistas del continente : PRI en México, APRA en Perú, ADECO en Venezuela, MNR en Bolivia, peronismo en Argentina. Buscó y estableció con estos movimientos una red de relaciones en función del papel progresista y antimperialista jugado en su época. El latinoamericanismo del Ps chileno fue siempre una expresión activa y militante. Ininterrumpidamente, desde su nacimiento, promueve una política de vinculación directa con todos los líderes y fuerzas políticas que adscribieron posiciones antimperialistas, nacionalistas y populistas en el continente.

-Fue constante presión sobre los gobiernos burgueses para abrir las puertas del país a las organizaciones perseguidas. Los dirigentes desterrados de APRA, ADECO, del MNR, de los partidos socialistas de Uruguay, Argentina y Colombia, entre ellos Juan José Arévalo, Rómulo Betancourt, Antonio García, Juan Lechín, etc., encontraron en el socialismo chileno el apoyo solidario y el vehículo eficiente para continuar sus luchas. Personalidades de la izquierda latinoamericana han ingresado al Ps. En dos oportunidades el autor integró delegaciones que propusieron a Lázaro Cárdenas y otros líderes latinoamericanos acciones conjuntas a nivel continental.

-En la década del sesenta el PS entrega —en la medida de sus escasos recursos- un apoyo activo y concreto al movimiento guerrillero boliviano, uruguayo (tupamaros) y argentino (montoneros). Militantes socialistas se incorporaron a la guerrilla boliviana, y cuando ésta es derrotada, Allende, entonces presidente del Senado, interpone la influencia de su cargo para salvar la vida de los guerrilleros que sobrevivieron a la represión.

-Es conocida la participación del PS en la creación de *OLAS,* cuyo primer presidente fue precisamente Salvador Allende.

-Durante el gobierno de la up, después de la matanza de Trelew, un grupo de militantes del ERP solicitaron asilo en Chile. La concesión de tal asilo -en la coyuntura que se estaba viviendo- ponía en peligro la política exterior de Chile. Planteada una contradicción entre las exigencias coyunturales de la política exterior y sus principios internacionalistas, el Ps y el Presidente de la República optaron sin vacilación por estos últimos.

Fue y es un partido independiente. Nace levantando banderas autónomas frente a las grandes corrientes del movimiento obrero internacional. El Partido Socialista constituye una expresión nacional ajena a las directrices de las internacionales. Se marginó por igual de la II Internacional Socialdemócrata y de la III Internacional Comunista. Esta característica aparece claramente definida por el ex secretario general del partido, camarada Raúl Ampuero, en carta dirigida a la dirección política del PC. En ella precisa:

los socialistas rehusamos someternos a cualquier centro dirigente. Propiciamos en cambio, un multilateral, democrático y activo intercambio de ideas y experiencias, entre todas las fuerzas, movimientos, partidos y estados anticapitalistas, sobre la base de la más estricta igualdad de derechos, a fin de que cada cual pueda encontrar por sí mismo la vía más eficaz y rápida -y la menos dolorosa- para establecer la sociedad socialista.

Su conducta se encuentra enraizada en las particularidades nacionales y en las mejores tradiciones chilenas. Desde su origen reivindicó para el proceses revolucionario la historia más valiosa del país y de su realidad.

Óscar Schnake, primer secretario general y fundador del partido, enfatizaba en 1939 esta singularidad en los siguientes términos:

Nuestra orientación es profundamente realista. Pretendemos conocer la realidad chilena, interpretarla en su mecanismo económico *y* social *y* hacer del partido un instrumento capaz de cambiar esta realidad. Pretendemos movilizar al pueblo entero hacia una acción de segunda independencia nacional, poner todo lo bueno de nuestra tradición histórica, política y social, al servicio de esa acción; despertar la sangre, los gustos, los afectos, despertar lo heroico que ha fecundado estas tierras, para darle un valor moral, traducido en voluntad, espíritu de sacrificio y solidaridad, a nuestra acción. Vamos impulsando la acción de todo un pueblo hacia su liberación, por eso queremos darle un contenido nacional, que abarque nuestra manera de trabajar, gozar, sufrir y sentir para hacer un pueblo nuevo en todas sus facetas.

Desde estas posiciones ha entregado su contribución constante al internacionalismo proletario, partiendo del reconocimiento de la solidaridad natural con los intereses de la clase obrera y todos los oprimidos del mundo. Ha hecho suyas las grandes luchas de los pueblos de Bolivia, Brasil, Puerto Rico y Guatemala, y desde sus inicios -la definitivamente victoriosa de Cuba. Entregó su apoyo decidido al combate heroico del pueblo vietnamita, a Argelia soberana y a los pueblos árabes, en especial al palestino; en la búsqueda legítima del reconocimiento de su identidad como Estado y como nación. Al mismo tiempo ha mantenido cordiales y fraternales relaciones con el Pcus, el PsuA de la RDA, la Liga de Comunistas Yugoslavos, el Partido del Trabajo de Corea y en especial con el PC de Cuba.

Hoy, en las difíciles condiciones que impone la derrota, ha llevado a niveles superiores relaciones fraternas y solidarias con el FLN de Argelia; con los partidos Baas de Siria y de Irak; con los partidos socialistas de Francia, Italia, Bélgica, Holanda, España, Grecia y Portugal; con los partidos comunistas de Italia y España; y ha entregado una adhesión resuelta y combativa al MPLA de Angola.

Por encima de las características señaladas destaca un rasgo proyectado decisivamente en el curso de la evolución política de Chile en los últimos veinte años: su sentido unitario y su resuelta conducta por imponer la unidad superior de la clase. Es esta concepción la que define -en mayor medida- su idiosincrasia histórica singular. Mientras otros partidos socialistas de América y Europa se,debatieron en un anticomunismo consignista y agotaron a la clase obrera en enfrentamientos estériles, el socialismo chileno —desde 1956- sostuvo la necesidad estratégica del entendimiento de los dos partidos obreros, como piedra angular de una política de alianza.

Articuló con el PC un sólido mecanismo de entendimiento, identificando sus destinos en la grandiosa tarea de construir el socialismo, sin pretensiones alternativistas subalternas ni seguidismos inconsecuentes.

Éste es un aspecto vital en la vida del partido. Su profundo sentido unitario no sólo se expresa en el hecho de ser el único partido socialista en el mundo que ha planteado como política propia y permanente, la unidad con un partido comunista, proposición formulada en el instante mismo de su fundación y mucho antes que la Internacional Comunista elaborara la política de Frente Popular. En el plano sindical, plantea desde el primer instante la necesidad de lograr la unidad de la clase, en una central que agrupe a todos los trabajadores, sin distinción. En el ámbito internacional emerge proponiendo la unidad política de las repúblicas latinoamericanas.

Finalmente, conviene destacar el espíritu altamente combativo que animó al partido desde su nacimiento. Se forja al calor de una aspiración revolucionaria, cual fue la «Revolución de junio», y da sus primeros pasos combatiendo a sangre y fuego a las hordas del fascismo criollo. Un año después de su fundación organiza brigadas de defensa, que devienen más tarde en las Milicias Socialistas. Éstas disputan cotidianamente la calle al nazismo chileno, poderosamente organizado. Las «camisas de acero» se multiplican por miles, de Arica a Magallanes y sus mártires galvanizan al partido y estimulan su acción. La juventud Socialista se forma en este clima combativo y revolucionario. Sus años de reflujo y decaimiento, no harán perder al PS este sello tan personal.

UN LARGO CAMINO DE MADURACIÓN

El Partido Socialista, como queda dicho, se fundó hace cuatro décadas en el contexto de una de las más graves crisis del capitalismo mundial, dramáticamente presente en Chile en la virtual paralización de su economía. El hambre se asomó por todas las latitudes y agitó las ansias de redención de las masas pauperizadas. Fue un período de notable ascenso de la lucha social, la cual alcanzó una expresión confusa y fragmentada en la instauración de la efímera «República Socialista», en junio de 1932.

El Partido Socialista aparece cuando el movimiento obrero sufría una honda crisis de dirección. Fue la respuesta histórica a la ausencia de un instrumento político capaz de interpretar las aspiraciones de la clase trabajadora. Esta exigencia histórica, la formula Óscar Schnake, su primer secretario general, en los siguientes términos:

El pueblo necesita un partido que por su organización, por los hombres que lo dirijan y su voluntad de acción, sea una garantía de su nuevo destino político. Falta un movimiento político eficaz que resuma las esperanzas y la fe del pueblo... Es el Partido Socialista que nace como depositario de su unidad de propósitos, y llamado a realizar su unidad de acción... Nace como una necesidad y por eso es recibido como el Partido del pueblo. (Discurso pronunciado el 19 de abril de 1939.)

A su seno afluyen las diversas corrientes del pensamiento revolucionario de la época -marxistas, anarquistas, socialdemócratas, nacional populistas, trotskistas- cristalizadas en una común orientación revolucionaria y antimperialista.

Las tendencias disociadoras generadas por estas corrientes marcan en sus inicios un deambular político inestable. Sin embargo, ya las elecciones parlamentarias de 1937, lo sitúan entre los partidos más poderosos del país. Es un gigante inmaduro, cuyo itinerario estará sellado por un accionar contradictorio de aciertos y desaciertos, rubricados por períodos de acercamiento y alejamiento de las masas.

Cuando el PC, superadas sus posiciones «izquierdistas», plantea la constitución de un Frente Popular junto al PR -consolidado ya como el partido de la pequeña burguesía y de sectores no despreciables de la naciente burguesía y la oligarquía minera-, el Partido Socialista abandona su inicial política de independencia de clases y se incorpora a la alianza propuesta.

Sin lugar a dudas, el Frente Popular significó para nuestro pueblo -por primera vez en su historia- un avance democrático de extraordinario valor y se echaron las bases de su futura industrialización. La clase obrera fue beneficiaria de una política social amplia que multiplicó el área de sus derechos y conquistas. Pero los grandes problemas de la liberación nacional no fueron tocados. Para el Partido Socialista, el resultado de esta experiencia y de las sucesivas fue desastroso. Abandonado por las masas, desintegrado en fracciones personalistas, terminará prácticamente por desaparecer del organigrama electoral en la contienda presidencial de 1946. En aquella oportunidad, el PS se negó a apoyar al candidato radical-comunista, Gabriel González Videla, y obtuvo una ínfima votación.

Sin embargo, las razones que determinaron su nacimiento y su presencia en la vida política del país, continuaron presentes después de la gestión colaboracionista. Sus mejores hombres se empeñarán en la tarea de rescatar para el socialismo chileno sus perfiles auténticos y reafirmar su vigencia histórica. En 1943, frente al gobierno radical de Juan Antonio Ríos, Salvador Allende plantea la imperiosa necesidad de que el PS retome la vanguardia de la lucha postergada:

La guerra ha llegado a un punto en que se evidencian ya con violencia, las contradicciones sociales del frente democrático, y nuestro país no escapa ni puede escapar a enfrentarse con ellas. No somos partidarios de exagerar ni contribuir a trizar la solidaridad de todos los hombres y sectores que están en lucha contra el fascismo; pero tampoco podemos renunciar a conquistar para los trabajadores manuales e intelectuales, los derechos y las reivindicaciones a que legítimamente son acreedores. (Carta al PC chileno, 1941)

El año 1946 se realiza en Concepción el XI Congreso General del PS. A su cabeza se coloca una dirección joven, expresión de la voluntad de reconstruir el partido de acuerdo a sus aspiraciones y doctrinas originales, superando los vicios que le habían enajenado el respaldo de los trabajadores. Lideriza el nuevo sector dirigente, el secretario general de la juventud, Raúl Ampuero.

Comienza entonces el ininterrumpido proceso de recuperación. Por primera vez el socialismo chileno define seriamente sus fundamentos teóricos y programáticos. Se estructura una organización sólida, ajena al caudillismo, o al oportunismo inmediatista, característica del período anterior, y se impone una conducta política responsable y consecuente, todo lo cual permite retomar la adhesión de importantes sectores populares.

El partido empieza a vivir un proceso vigoroso de maduración política y revolucionaria. En julio de 1957, se celebra el llamado Congreso de Unidad, que homogeniza al socialismo chileno en torno a la línea política de «Frente de Trabajadores». Esta concepción, presente en los inicios del partido y concebida como una táctica de lucha de la clase obrera a partir de una correcta caracterización de la revolución chilena, rescata la autonomía del proletariado, y reclama la unidad política y social de los trabajadores.

Como resultado de esta línea, se consolida un entendimiento básico con el Partido Comunista, en el llamado Frente de Acción Popular (FLAP), que de inmediato atrajo la adhesión entusiasta de vastos sectores de obreros, campesinos, empleados, intelectuales y juventud. En las elecciones presidenciales de septiembre de 1958, dos años después de su fundación, socialistas y comunistas estuvieron a punto de conquistar el gobierno. La mínima diferencia de votos que nos privó de la victoria permite medir físicamente el poderío del movimiento estructurado tras una correcta política de alianzas.

Sólo en el Congreso de Chillán en 1957, el partido se declara leninista, definición que recoge con atraso el quehacer concreto de la mayor parte de su existencia. Tal declaración no es sino la reafirmación de un principio que ya formaba parte de su acervo político ideológico. El proceso de constante superación teórica, iniciado en 1946 en Concepción, culmina en el Congreso de Chillán, donde definitivamente precisa su posición frente a los temas más candentes de la problemática revolucionaria, nacional y continental.

En el ínterin fue soldada la alianza socialista-comunista, una experiencia excepcional de colaboración entre dos partidos obreros, sobre bases de igualdad y de respeto de sus diversidades. Jamás en la historia política de Chile, y pocas veces en la del movimiento obrero internacional, se dio el caso de un bloque político tan compacto. Su solidez se acentúa frente a las exigencias de la realidad chilena, posibilita la unidad de la clase obrera y del movimiento popular, y construye a partir de ella la victoria de 1970.

APORTES AL DEBATE TEÓRICO

La lucha enfrentó a los partidos populares a la necesidad de despejar sus posiciones en torno a algunas cuestiones cardinales. Éstas han incidido en la evolución política de los últimos años con mayor o menor intensidad, en períodos y coyunturas diferentes, pero en todo caso siempre estuvieron presentes, sea como factores de unidad o como elementos disociadores.

Cuatro grandes temas han enriquecido el debate ideológico en el seno de la izquierda: la existencia y obediencia a un centro ideológico, la definición del carácter de la revolución chilena, la determinación de la vía de acceso al poder y la concepción de una adecuada política de alianzas.

Frente a cada uno de ellos, el Partido Socialista formuló sus posiciones conservando siempre una sorprendente constante histórica. A pesar de las agitadas vicisitudes de su trayectoria política, la respuesta socialista mantiene una básica consecuencia ideológica.

Definiéndose como un partido marxista, defendió obstinadamente en su origen y desarrollo, la plena autonomía de los partidos y movimientos revolucionarios para elaborar sus propias concepciones tácticas y estratégicas. Es su mérito haber comprendido, hace cuarenta años, que estas concepciones sólo podían ser plasmadas a partir de la valoración científica de cada realidad nacional y del enraizamiento del partido en las singularidades de esa realidad.

Desde esta perspectiva, el PS recusó tempranamente su adscripción a cualquier «centro de conducción», estimando que la presunta infalibilidad de los recetarios generales atentaba contra la diversidad misma de la vida. Los pueblos transitan por estados de desarrollo disímiles y hasta contrapuestos. Cada uno de ellos impone, a la tarea de construir el socialismo, métodos, vías, formas de lucha y características diferentes. Sin negar la existencia de rasgos comunes en toda revolución, y sin desconocer las leyes generales de la historia, el socialismo chileno entendió y entiende que ellos se configuran en las diferentes prácticas revolucionarias, y no en la determinación, más o menos rígida, de algún pontificado indiscutido.

Sintiéndose parte de las fuerzas socialistas del mundo y solidario de su destino, propició un intercambio activo, creador y democrático de experiencias, ideas y concepciones, sobre la base del respeto mutuo y de una plena igualdad de derechos.

Hoy día, importantes partidos del movimiento comunista internacional reclaman esa autonomía cuya trascendencia el socialismo chileno vislumbró en el instante mismo de su gestación.

Y no parece éste sólo un problema de principios. Desde una perspectiva más pragmática, se constata la importancia de que las masas perciban la independencia de sus vanguardias revolucionarias. La experiencia ha demostrado que lo prefieren así.

Ésta es una cuestión por largos años mantenida en el centro del debate revolucionario latinoamericano. ¿Deberá ser la nuestra una revolución democrático-burguesa o una revolución socialista?

Desde luego, el carácter de la revolución no se determina teórica o subjetivamente. No lo decide la voluntad apriorísticaa de los individuos o de las fuerzas revolucionarias, sino es el producto del análisis objetivo de la sociedad. Es el grado y naturaleza del desarrollo capitalista en cada caso específico y la estructura y dinámica de las clases sociales, particularmente el papel de las burguesías nacionales, lo que define en esencia el carácter de la revolución.

A partir de esta afirmación y del examen concreto de la sociedad chilena, el Partido Socialista estimó en el pasado, y estima hoy, que las trasformaciones no corresponden en modo alguno a la llamada «revolución democrático-burguesa».

En Chile, con una formación histórica capitalista dependiente y una avanzada fase de monopolización, la burguesía no estaba ni está en condiciones de realizar las tareas -aún inconclusas- correspondientes a esa eventual etapa. La revolución democrático-burguesa fue insoslayable en los países capitalistas altamente desarrollados. Las burguesías nacionales desempeñaron allí un papel, imposible de reiterar en los países subdesarrollados, donde desde su inicio -así ha ocurrido en Chile- amarraron su destino a las oligarquías locales y a los imperialismos, convirtiéndose en clase dependiente, o dicho de otro modo, en clase dominante-dominada.

Los sectores más importantes y dinámicos de la burguesía chilena están umbilicalmente ligados al capital extranjero, impidiéndoles — este hecho- encabezar la lucha antimperialista.

En febrero de 1964, el entonces secretario general del PS, Raúl Ampuero, puntualizaba la posición socialista frente al carácter de la revolución, en los siguientes términos:

Con el tiempo dos concepciones se perfilan claramente en el campo de la política popular. El Partido Comunista, en una reiteración más o menos mecánica del cuadro de 1938, persistía en la necesidad de sostener un amplio frente democrático o de liberación nacional que comenzara en la extrema izquierda con los Partidos obreros y terminara en el centro con los radicales y democratacristianos, sin excluir en algunos momentos, la participación eventual de ciertos grupos liberales. Tal línea se afirmaba en el esquema teórico tradicional de algunos círculos marxistas al disociar en dos grandes fases el desarrollo revolucionario en los países dependientes: la etapa democrático-burguesa y la etapa socialista. Por su propia naturaleza, en la primera cabría a la burguesía nacional un papel decisivo si no el principal. Los socialistas, por nuestra parte, vivimos muy intensamente la experiencia del Frente Popular, para ignorar los procesos operados durante esos años. Cada vez con mayor resolución empezamos a sostener una concepción nueva, que negaba a la burguesía chilena como clase, toda posibilidad real de conducir la lucha antimperialista y antifeudal, aún de participar en ella con lealtad y consecuencia.

De tal manera, los socialistas concebimos el proceso revolucionario como una marcha ininterrumpida, como un proceso único y continuo, que cumple en su primera fase tareas eminentemente antimperialistas y democráticas, pero que inevitablemente desemboca en la construcción de una sociedad socialista. Así entendido el proceso asume desde sus inicios un carácter socialista. Es ésta la concepción delineada por el Programa Básico del Gobierno de la UP, al caracterizar a Chile como un país «capitalista, dependiente del imperialismo», y señalar que «el objetivo central de su política es remplazar la actual estructura económica, terminando con el poder monopolista del capital nacional y extranjero y del latifundio para iniciar la construcción del socialismo».

Entendemos que esta concepción no es válida para los países coloniales y semicoloniales, donde las burguesías nacionales están en conflicto con los intereses imperiales. En cambio, sí nos parece vigente para la mayoría de los países de América Latina, en los cuales el grado de avance de las relaciones capitalistas y su condición dependiente, constituye un impedimento insalvable para el desarrollo de la sociedad.

El Partido Socialista tiene el mérito de haber caracterizado hace años la sociedad chilena como una formación histórica capitalista dependiente, definición ampliamente ratificada por la literatura científica posterior. A partir de esta afirmación, la burguesía nacional, precisamente por su condición dependiente, se encuentra en la imposibilidad de ser fuerza dirigente en la lucha de liberación. En América Latina, esa lucha y la revolución social, son partes integrantes y mutuamente complementarias de un mismo proceso. En esta situación la burguesía, como clase, no está en posición de detentar el liderazgo ni de la revolución liberadora ni de la revolución social. Solamente el proletariado puede asumir el papel de fuerza hegemónica.

Hasta el advenimiento del Gobierno Popular en 1970, el problema de las vías de acceso al poder parecía tener un carácter más bien adjetivo. El desenvolvimiento seguro y constante del movimiento popular en los marcos de una institucionalidad liberal, aparentemente amplia y flexible, tendía a hacer irrelevante y académica una discusión profunda del tema.

Las tribulaciones del proceso revolucionario y su desenlace posterior, lo rescatan del plano meramente teórico, para otorgarle una definitiva y, podríamos decir, dramática prioridad.

No obstante, el Partido Socialista había asumido posiciones. Primero, desde una general aceptación de las concepciones teóricas dominantes, y más tarde, en forma más precisa, a partir del análisis concreto de nuestra realidad sociopolítica. Entre una y otra existe un hilo conductor que lo lleva siempre a denunciar la inviabilidad de la llamada «vía pacífica al socialismo».

La experiencia obstinada confirmaba la inmutabilidad de las leyes generales del marxismo. En ningún lugar del mundo las clases dominantes se han dejado expropiar sin recurrir a la violencia. Por el contrario, donde quiera que los pueblos alteraron la normalidad de su dominación, se volcó sobre ellos la más extrema crueldad.

En América Latina la práctica ha sido inequívoca e inveterada. La violencia estuvo siempre presente, ya en las querellas interburguesas, ya en las luchas sangrientas de sus caudillos oligárquicos, o en la afirmación del dominio imperialista. El saldo fue siempre estremecedor. En Colombia, en un lapso no superior a diez años, la violencia del sistema sacrifica a más de trescientos mil hombres. En México, no menos de un millón de campesinos son asesinados en la larga lucha por la liberación y la tierra. En Centroamérica y Brasil las oligarquías gobernantes afirman su poder en la masacre periódica de obreros, de estudiantes y campesinos. En mayor o menor medida ello ocurre en cada rincón del continente. Por su parte, los marines norteamericanos irrumpen a sangre y fuego, cuantas veces fue menester, ya para rapiñar territorio, ya para hacer respetar los «dividendos justos» de sus inversionistas. La historia de América Latina es, pues, una historia de sangre y de terror.

La existencia de una sólida estructura democrática, la vigencia secular de una institucionalidad sólo ocasionalmente interrumpida, y la presencia de un sistema mucho más evolucionado que otros del continente, no eximía a los revolucionarios chilenos de la obligación de examinar el significado de la violencia en nuestra historia. Suponerla apriorísticamente ajena a «las tradiciones nacionales», fuera de tabla en la discusión doctrinaria, fue un error irreparable.

Siempre, de una u otra manera, en el seno del socialismo chileno, pesó una honda desconfianza acerca de las «bondades» de nuestro sistema político. Se entendió que el régimen liberal, representativo, flexible y apto para modernizarse -así lo había demostrado- dejaría de ser tal para la reacción en cuanto la insurgencia popular cuestionara seriamente la dominación burguesa-imperialista.

En 1961, el secretario general del partido reiteraba este escepticismo en los siguientes términos:

Los socialistas, sabemos que antes, coetáneamente o después de un proceso electoral -no estoy haciendo profecías- pero en algún instante, las clases privilegiadas de este país van a utilizar la fuerza para paralizar la ofensiva del pueblo sobre el poder, para desconocer los resultados electorales, para restringir su voluntad de decisión en los comicios. No sé cuándo ni dónde, pero la experiencia de los últimos años demuestra que la oligarquía latinoamericana no titubeó nunca en romper la legalidad en la vana tentativa de conservar una sociedad condenada.

En 1967, siendo elegido secretario general Aniceto Rodríguez, se celebró en Chillán el XXII Congreso del partido. Allí, por primera vez, llenando uno de los grandes vacíos del análisis político partidario, se abordó el problema estratégico de las vías de acceso al poder, no considerado en el desarrollo de la tesis del «Frente de Trabajadores». A contar de un diagnóstico acertado -los hechos demuestran hasta la saciedad la ineptitud de la institucionalidad burguesa para tolerar el acceso al poder del proletariado- se concluyó que la vía armada era la vía correcta en el contexto de nuestra realidad. Que el quiebre definitivo del Estado burgués, cualquiera fuera la duración de una eventual vía pacífica, se definiría -en última instancia- en forma violenta.

El documento político aprobado expresaba en su parte medular: «La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada.»

Esta conclusión, sin olvidar la excepcional evolución política chilena, consideraba sus debilidades intrínsecas frente al desarrollo de un proyecto revolucionario. Por eso el mismo documento, al explicitar el pensamiento anterior, señala:

Necio sería negar que Chile se destaca dentro del Continente por la larga trayectoria de su movimiento popular, que en las variadas circunstancias de su historia, merced a sus luchas y esfuerzos, ha logrado estructurar en nuestra patria un sistema político considerablemente más evolucionado y maduro que el resto de las hermanas repúblicas. Y por eso mismo, es en Chile también donde se hacen más evidentes los límites y las inconsecuencias de estos sistemas políticos formalmente democráticos. La experiencia de hoy y la de ayer -como ya dijimos- demuestra que el sistema democrático se mantiene hasta el momento en que las clases dominantes empiezan a considerar amenazados sus intereses fundamentales, y cuando eso ocurre, no vacilan en romper el esquema institucional que antes les servía para defender por la fuerza su situación privilegiada.

Admitimos que la imprecisa redacción de la concepción central del documento, no reflejó adecuadamente la importancia de otras formas de lucha, de extraordinaria significación en Chile. La evolución del movimiento popular, su grado de organización, su enorme poderío, son justamente expresión de esas formas de lucha. La lucha de masas, la lucha ideológica y el uso de las instituciones burguesas, permitieron la creación de un sólido bloque de izquierda.

En esencia, el diagnóstico estratégico elaborado en Chillán fue correcto y no corresponde a «un infantilismo revolucionario» -como se ha pretendido- o a la adopción de una política «izquierdista producto de concepciones foquistas». Por el contrario, creemos que otra sería nuestra suerte y otro el destino de la revolución chilena, si hubiéremos sido consecuentes con ese diagnóstico y hubiéremos dispuesto de la capacidad orgánica para implementarla.

Una reflexión final sobre este tema, pertinente a partir de la tendencia a identificar la previsión racional del uso de la violencia con el anhelo subjetivo de provocarla. Ningún partido revolucionario desea -*per se*- la violencia, ni la exalta a la categoría de un imperativo político, ni se declara «por principio» partidario de ella. En la búsqueda de una sociedad superior aspiramos precisamente a abolirla. Sin embargo, la historia nos enseña porfiadamente que la fuerza es el recurso último de las clases privilegiadas. Y lo hemos aprendido con la sangre y el dolor de muchos pueblos, entre ellos el nuestro. De allí que no sería revolucionaria la dirección que trasformara la legítima y noble aspiración de construir pacíficamente el socialismo, en el objetivo esencial, último e inmodificable de su acción.

El 29 de febrero de 1956 se constituyó el Frente de Acción Popular (FRAP). Socialistas y comunistas configuraron, por primera vez en la historia del país, un bloque político sobre una base clasista y revolucionaria. El nacimiento del FRAP cerró un largo ciclo en la evolución del movimiento popular chileno, cuyo balance global era negativo. Al mismo tiempo inaugura un período de ascenso constante de la clase trabajadora tras una formulación estratégica correcta. Es la «gran marcha», que concluirá catorce años más tarde en una de las victorias más trascendentes del movimiento obrero internacional.

Sobre la base del esquema tradicional, que concibe la existencia de dos «tiempos» en el desarrollo revolucionario de los países dependientes: uno democrático burgués y otro socialista, el Pe persistía en una alianza con la llamada burguesía progresista. Así se formulaba la tesis del «Frente Democrático».

Los socialistas, por su parte, duramente impactados por las experiencias colaboracionistas de los años anteriores, y con una distinta concepción del carácter de la revolución chilena, propiciaban un entendimiento que rescataba para el proletariado su autonomía y papel conduccional.

En definitiva, el FRAP se estructura bajo el signo de esta política de alianza, concretando en los hechos un amplio frente de clases, en primer lugar con los campesinos; y en segundo lugar con sectores progresistas de las capas medias, intelectuales y juventud.

Como dijimos, en 1936 los partidos Socialista y Comunista habían confluido -junto al Partido Radical- en la integración del Frente Popular. Este proyecto era la trascripción nacional de la línea diseñada por Jorge Dimitrov, en el VII Congreso de la Internacional Comunista, materializado casi simultáneamente en España y Francia.

Entre 1936 y 1956 ambos partidos vivieron alternativas de unidad y distanciamiento. Agotada prematuramente la experiencia de Frente Popular, surgieron discrepancias sustanciales, que obstruyeron por largos años la unidad de la clase. Durante mucho tiempo, tanto el PS como el PC contrajeron alianzas y compromisos separados, temporales y precarios, con distintas fracciones de la burguesía.

En 1946, el Partido Comunista insiste en el compromiso frentista al constituir junto con el Partido Radical la denominada Alianza Democrática, cuyo candidato -Gabriel González Videla- es elegido presidente de la República. Esta vez las consecuencias fueron más funestas. Apenas seis meses después de instalado el nuevo gobierno, en el cual inicialmente participaron ministros comunistas, radicales y liberales, se desató una feroz represión, especialmente sobre el Partido Comunista, el cual fue colocado fuera de la ley. No parece ocioso recordar que en Chile, Francia, Italia, Finlandia y Bélgica, los partidos comunistas son expulsados de las combinaciones gubernativas de que formaban parte casi simultáneamente. En marzo de 1947, Gabriel González Videla pide la renuncia de los ministros comunistas y declara el partido fuera de la ley. Spack lo hace en Bélgica en el mismo mes; Ramadier en Francia en mayo del mismo año; mientras De Gasperi hace lo propio en Italia, en la misma época, al regreso de su viaje a los EU. Las instrucciones del imperialismo fueron cumplidas de inmediato y oportunamente en países y latitudes absolutamente diferentes.

Por su parte -en 1952- el PS ve en la insurgencia del multitudinario movimiento populista liderizado por Carlos Ibáñez, la posibilidad de orientarlo tras banderas antimperialistas. Si bien el apoyo a Ibáñez estableció de hecho una alianza con amplios sectores medios y populares, en definitiva el gobierno del «General de la Esperanza» se agotó en una nueva frustración.

En resumen, durante veinte años (1936-1956), el movimiento popular se desgastó en una pertinaz política de coaliciones electorales sin sentido ni destino. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué beneficios se lograron? ¿Cuáles son los avances?

Exceptuando la experiencia del Frente Popular, históricamente insoslayable en el contexto de la guerra mundial contra el fascismo, y cuyo mérito principal fue en Chile haber quebrado definitivamente el dominio oligárquico e inaugurado el proceso de industrialización nacional, el saldo de dos décadas de colaboracionismo fue categóricamente negativo. El sometimiento de los objetivos históricos del proletariado a caudillos populistas y a direcciones burguesas reformistas, se tradujo en derrotas y frustraciones, en represión, corrupción y descrédito.

En Chile así ocurrió. Debilitadas las vanguardias revolucionarias sobrevino un grave retroceso no fácil de remontar. La alianza con el PR en 1946, no impidió -una vez iniciada la guerra fría- la aplicación al Pe de una ley de excepción, la desarticulación de sus cuadros y la proscripción de la vida civil. Las alianzas, compromisos y pactos circunstanciales y oportunistas del Ps hasta ese mismo año lo arrastraron, por su parte, a su casi total desintegración.

Hasta ese entonces el PR, en cuanto expresión mayoritaria de las capas medias, jamás aceptó apoyar un candidato de los partidos populares, ni siquiera en 1958 o 1964, cuando ya nada tenía que hacer. Sólo después de un largo y difícil proceso de depuración orgánica e ideológica y una vez erradicados sus sectores reaccionarios, accedió a un proyecto socialista, impulsado por los partidos del proletariado.

De allí la significación profunda, la trascendencia histórica y revolucionaria del FRAP.

Ya lo hemos dicho, Conforma el bloque político revolucionario más sólido, estable e ideológicamente compacto, de América Latina. Su estatura política nace de una concepción estratégica correcta, que interpreta y moviliza a capas muy amplias de la población, y del hecho de haberse constituido en la expresión orgánica y unitaria de la clase obrera y de sus intereses históricos.

Durante catorce años orienta los combates de las masas por la conquista del poder, alimenta el desarrollo vigoroso de su conciencia de clase y se erige en única y real alternativa al poder burgués, gravitando decisivamente en todo el quehacer nacional. Bajo su condición, se suelda la unidad política de la clase obrera, tras sus partidos de vanguardia; y su unidad social, en la Central única de Trabajadores, fenómeno sin precedentes en otro país del mundo capitalista. Surge así una opción auténtica de poder revolucionario. Su influencia sobre el conjunto de la sociedad, llega al punto de permitirle «internalizar» en ella sus más importantes banderas de cambios estructurales. La nacionalización de las riquezas básicas, la reforma agraria, la redistribución del ingreso, la planificación de la economía, se incorporan al debate nacional y en definitiva son aceptadas por el• conjunto de la nación, incluyendo a la clase hegemónica.

LA LÍNEA DE «FRENTE DE TRABAJADORES»

Veinte años de colaboración con fracciones de la burguesía condujeron al movimiento popular a la frustración y a la derrota. Catorce años de lucha, tras un proyecto propio, construyeron la victoria de 1970 y permitieron la irrupción de un proceso revolucionario que colocó al pueblo en el umbral de la conquista del poder.

Éste fue el resultado —en Chile- de la aplicación de una justa política de alianzas de clases, en la búsqueda de una perspectiva verdaderamente revolucionaria.

Ésta se diseña sobre la definición del carácter socialista de la revolución, que liga en un proceso ininterrumpido las tareas democráticas y antimperialistas con las tareas socialistas. En consecuencia se pronuncia por un programa antimonopólico, antilatifundista y antimperialista, cuya implementación pasa por fases diferentes, y donde los rasgos socialistas se acentúan sostenida y progresivamente. Recusando a la burguesía nacional -dependiente del imperialismo y carente de autonomía para asumir tareas contrarias a él- señala como los únicos llamados a protagonizar la lucha contra el viejo orden: al proletariado, a los campesinos, al subproletariado marginal, a la pequeña burguesía progresista, a la intelectualidad y a los estudiantes.

El «Frente de Trabajadores» supone el agrupamiento de las masas en cuanto clases explotadas, para enfrentar a la clase explotadora. Centra entonces su política en la necesidad de rescatar el papel autónomo del proletariado como fuerza hegemónica de un bloque sociopolítico.

La concepción de «Frente de Trabajadores» no es una creación tardía en la vida del partido, novedosa y ajena a su acervo ideológico. Ya en sus primeros documentos encontramos el llamado reiterado a la formación de un frente revolucionario, construido a partir de la hegemonía e independencia de los trabajadores. Hasta la constitución del Frente Popular -1936-, se defienden como postulados básicos, el carácter socialista de la revolución y la conformación para tal efecto de un «Frente de Trabajadores», con plena autonomía de clase.

Será precisamente la negativa experiencia colaboracionista la que pondrá en evidencia la corrección histórica de las posiciones iniciales: las alianzas pequeña burguesía-proletariado, a las cuales este último se incorpora invariablemente desde posiciones de subordinación, lo obligaron a renunciar a su propio proyecto político, limitándolo a actuar como furgón de cola de la burguesía y simple masa de maniobra electoral de ésta.

La línea adoptada en 1957 -que desde entonces caracteriza ininterrumpidamente la conducta de nuestro partido- recoge creadora y acertadamente los principios básicos y la experiencia de la lucha de clases en las décadas anteriores, a la par que la voluntad autonomista y unitaria de la clase obrera.

En la lucha ideológica, practicada en el seno del movimiento revolucionario chileno, la línea de «Frente de Trabajadores» constituyó la contrapartida natural frente a la línea del PC de «liberación nacional». A partir de la etapa democrático-burguesa, como antesala necesaria de la transición al socialismo, la tesis del Pc sobre política de alianzas reservaba la iniciativa a los partidos de la pequeña burguesía reformista (PR primero, más tarde el PDC), cuya misión sería modernizar el Estado y obligar a la burguesía nacional a cumplir su papel histórico clásico.

El rechazo que la tesis socialista supone a la práctica tradicional de alianzas, ha sido interpretado como la expresión de una política aislacionista de la clase obrera, bajo el pretexto de cautelar la pureza de su formulación estratégica. Esta apreciación es incorrecta. Todos los documentos del partido, elaborados con posterioridad al Congreso de 1957, reiteran la amplitud de los sectores sociales que tienen cabida en la constitución del frente propuesto. Tal amplitud se materializó en la constitución del FRAP primero y de la UP más tarde. Ambas coaliciones demostraron históricamente el vasto espectro social que el proletariado es capaz de dinamizar en torno a su propio proyecto.

Esta nueva concepción política impactó profundamente la conciencia de las grandes masas urbanas y campesinas. Les restituyó la confianza perdida y las movilizó combativamente alrededor de un centro polarizador de extraordinaria potencialidad revolucionaria, el cual alteró desde 1956 -decisivamente- el cuadro político nacional.

El FRAP, en cuanto coalición política conformada en torno al eje central de los partidos de la clase, demostró cómo el proletariado, alineado tras un proyecto político trascendente y comprometido en una gran empresa revolucionaria, es capaz de movilizar importantísimos sectores de la opinión pública, sin lesionar su autonomía ni su papel dirigente. Sumergido, en cambio, bajo un proyecto y una dirección burguesa o pequeño burguesa, mediatiza sus propias alternativas y luchas.

Durante las dos últimas décadas, el campesinado y la clase obrera constituyeron un poderoso polo de atracción. Socialistas y comunistas enfrentaron juntos todos los eventos electorales, sindicales, estudiantiles y en general políticos de la época. Manteniendo sus diferencias, unidos en la diversidad de sus concepciones, son beneficiarios por igual de un crecimiento sostenido y parejo y de una similar dimensión electoral. La extraordinaria influencia irradiada por la resuelta unidad de los partidos obreros, tiene un inmediato reflejo en el proceso de decantación interna operado en el viejo Partido Radical, así como el inicio de un proceso similar en las filas del PDC. En 1969, una parte cualitativamente importante de la juventud demócrata-cristiana se escinde para dar nacimiento al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que de inmediato reconoce filas junto a los partidos populares. Esa poderosa atracción continuará expresándose incluso después de la victoria popular en 1970, cuando -esta vez- la IC se desgaja de la Democracia Cristiana y se integra al bloque dirigido por los partidos obreros.

Finalmente, nos parece necesario precisar que en rigor la línea de «Frente de Trabajadores» no ha excluido ni excluye la posibilidad de concertar alianzas con los partidos de la pequeña burguesía. Hasta 1970, e, incluso hasta nuestros días, no se ha dado en Chile alternativaalguna de alianza como no fuera sobre la explícita renuncia de la hegemonía de los partidos obreros. Los llamados ambiciosos a constituir amplios frentes de lucha con sectores no proletarios, invariablemente «faltos de eco», se diluyeron en pactos electorales intrascendentes, subalternos y oportunistas, o lisa y llanamente, no se materializaron.

VIGENCIA HISTÓRICA DEL SOCIALISMO CHILENO

Podemos afirmar sin jactancia, que el Ps buscó afanosamente un camino para la trasformación de Chile desde posiciones clasistas y revolucionarias. Su conducta política en los últimos veinte años -más allá de errores y debilidades- ha estado determinada por una correcta interpretación marxista-leninista de la realidad nacional y de la estructura dinámica de la lucha de clases. A partir de ella precisó sus posiciones fundamentales: rescatar el papel protagónico que corresponde al proletariado en la liberación económica y social del país; afirmar que esta liberación sólo es posible en el contexto de una revolución socialista, en cuyo seno no están compartimentadas las tareas democráticas y socialistas; finalmente, concluir que no es factible el tránsito pacífico al socialismo en el ámbito de la realidad concreta nacional y continental. La derrota del proceso revolucionario en 1973 no cuestionó estas aseveraciones. Por el contrario, las confirmó de manera trágica. Ellas estuvieron a prueba durante los tres años del Gobierno Popular. En el marco del Programa Básico de la UP y afianzando en su esencia revolucionaria, el Ps reiteró una concepción estratégica que suponía la defensa de la revolución, tomando incluso la iniciativa si ello era necesario. Puede afirmarse, no sin razón, que una vez más nuestro partido estuvo acertado en sus previsiones estratégicas, pero no en sus implementaciones tácticas.

Los vicios y debilidades del Ps han estado a flor de tierra. Hemos hecho un esfuerzo consciente y sostenido por superarlos y no hemos tratado de ocultarlos. A lo largo de su vida, ha caído en contradicciones inherentes a una sostenida y combativa actividad política; pero tanto su desarrollo ideológico como su quehacer en la realidad nacional, se desplegaron en torno a un eje central, cuyos lineamientos esenciales han sido tenazmente respetados en el curso de las últimas dos décadas.

Creemos que la experiencia concreta de la vida política chilena, vino casi invariablemente en auxilio de las posiciones socialistas. A despecho de quienes ven en ellas la preeminencia de una ideología pequeñoburguesa o la simple carencia de «rigor científico» en sus análisis, la historia se ha encargado porfiadamente de preservar su veracidad. Los testimonios son variados y a prueba de cualquier intento de tergiversación.

La derrota misma reafirma la certeza de su vigencia. La contribución del socialismo chileno a la evolución política del país, y la más específica, al proceso revolucionario encabezado por la UP, supera en mucho sus errores. Sus banderas permitieron ayer canalizar las grandes esperanzas de las masas chilenas, vinculándolas a la lucha continental. Fue el cauce insustituible a través del cual se impidió que sectores significativos de trabajadores, intelectuales y jóvenes fueran ganados para posiciones reformistas o «izquierdistas». Fue su insistencia, tozuda e intransigente a veces, la que más influyó por imprimir un sello revolucionario al Programa del Gobierno y a sus decisiones fundamentales.

La vigencia del PS no está determinada sólo por su largo gravitar en la vida nacional, ni por la generosa lealtad de sus militantes, ni por sus glorias de antaño, ni por los mártires entregados a la lucha contra el fascismo. Todo ello cuenta, por cierto. Pero su proyección política en las luchas de hoy y del futuro, está avalada por su historia, por su íntima ligazón con las aspiraciones de las masas y, fundamentalmente, por la validez de sus formulaciones ideológicas. Es ello lo que le otorga especificidad histórica, personalidad política y un perfil sólidamente enraizado en la vida de la nación.

Ese patrimonio de ideas y sentimientos determina, pues, su presencia insustituible en los combates futuros. Cualquiera sea la extensión y profundidad del esfuerzo fascista por erradicarlo de la realidad chilena, inevitablemente reaparecerá como una fuerza decisiva en el acontecer del país.

(1)Casi en la misma época en que Recabarren fundaba en el norte el POS, en Magallanes, en el extremo austral, se constituía el Partido Socialista chileno y en Valparaíso se organizaba el Partido Socialista Obrero. Entre estas organizaciones no existía relación alguna.

(2) Federación Obrera de Chile. Se organiza en 1909 con el nombre, de «Gran Federación Obrera de *Chile»* bajo una clara inspiración mutualista. Madurará más tarde como combativa organización de la clase, dinamizada por el POS y las organizaciones anarquistas.Adhiere a la Internacional Socialista, perdiendo ascendiente e influencia sobre las bases obreras.

2. LA UNIDAD POPULAR: UN PROGRAMA PARA CHILE

A mediados de 1969, los partidos Socialista y Comunista dirigieron una carta pública a los partidos y movimientos que más tarde convergerían en la fundación de la Unidad Popular, invitándoles a constituir un bloque político capaz de ofrecer a Chile una alternativa nacional, popular y revolucionaria.

El llamado fue acogido. Algunos días después dirigentes de organizaciones representativas de diversas corrientes revolucionarias y progresistas iniciaban el estudio y redacción del futuro Programa Básico de Gobierno.

Culminaba así una etapa perseverante de desarrollo y maduración del movimiento popular chileno. La UP surge como una exigencia natural de este proceso, en el marco de una crisis de dominación del sistema burgués imperialista, del fracaso rotundo de una experiencia reformista, y en instantes en que el ascenso de las masas busca sobrepasar las formas capitalistas dependientes de desarrollo.

En el plano político y social, la Unidad Popular emerge como la continuación del antiguo Frente de Acción Popular (FRAP) creado en 1956. La incorporación de otras vertientes del pensamiento democrático otorga a la unidad de los trabajadores una nueva dimensión y la amplitud necesaria para encarar, más allá de una etapa transicional, la construcción del socialismo.

Al igual que en el FRAP, catorce años antes, el centro de gravedad continúa girando en torno a los partidos del proletariado.

El pueblo visualiza en la nueva alternativa una fuerza poderosa, socialmente amplia e ideológicamente homogénea, cuyo proyecto político resume los intereses y las aspiraciones de las grandes mayorías nacionales y, por sobre todo, de las capas sociales más postergadas.

Así, el movimiento popular se ve fortalecido con la incorporación de importantes expresiones del pensamiento laico y cristiano de avanzada. El Partido Radical, representante de la pequeña burguesía, sacude su lastre reaccionario impulsado por una nueva visión de la realidad nacional. Culmina así un largo proceso de maduración ideológica, el cual le permite afianzar su personalidad política y desde sus antiguas posiciones racionalistas y positivistas, adherir a una empresa histórica de carácter socialista. Lo mismo ocurre con el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), portavoz de los sectores cristianos, también identificado con un proceso de contenido socialista. Este movimiento se desgaja de la Democracia Cristiana después del vano intento de arrastrarla a un compromiso de trasformación revolucionaria.

Si bien la incorporación de estos partidos no altera cuantitativamente la antigua composición del FRAP, preciso es reconocerlo, determinó el triunfo electoral de 1970, y su integración al nuevo bloque cualitativamente tuvo un significado importantísimo. Fuerzas políticas con una diferente dimensión del hombre, del mundo y de la historia, se conjugan en la decisión superior de modificar radicalmente las viejas estructuras, erradicar del poder a las clases dominantes, construir un nuevo Estado e iniciar la edificación del socialismo.

Hacia 1970, el fracaso del reformismo, la extrema concentración del capital y la exacerbación de la dependencia, terminan por poner en evidencia el carácter de nuestra sociedad y de la revolución que debía trasformarla. El acuerdo de los partidos de la UP respondió a estas circunstancias, al desarrollo de sus respectivas líneas políticas y a la disposición unitaria, sostenida largamente por la izquierda chilena.

TRES DOCUMENTOS CLAVES

Este compromiso histórico quedó formalmente consagrado en tres documentos: «El pacto de la Unidad Popular», «El acuerdo sobre conducción y estilo de -la campaña» se prevé el enfrentamiento social bierno Popular».

Ellos se elaboran bajo una orientación justa y correcta y recogen puntos de vista y concepciones disimiles. En lo medular son el resultado armónico y dialéctico de las posiciones de los partidos signatarios, especialmente PS y PC. Pero sería erróneo suponer en estos documentos, el reflejo de imposiciones unilaterales de algunos de los partidos.

El proyecto político entregado al país cancela la experiencia reformista dirigida por la De durante los años 1964-1970. Ya la introducción del Programa Básico señalaba:

Las recetas «reformistas» y «desarrollistas» que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei, no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio naufragaron sin pena ni gloria en el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado una vez más que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.

La concepción de un nuevo poder, basado en la participación real y organizada del pueblo, para la solución de sus problemas específicos, es diseñada también en la introducción del programa como una tarea destinada a producir sus efectos al calor de la propia campaña electoral:

Para estimular y orientar la movilización del pueblo hacia la conquista del poder,, constituiremos por todas partes comités de la Unidad Popular, articulados en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela, por los militantes de los partidos de izquierda e integrados por esa multitud de chilenos que se definen por cambios fundamentales. Estos no sólo serán organismos electorales. Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas y sobre todo se prepararán para «ejercer el Poder Popular». Así pues, este nuevo poder que Chile necesita, debe empezar a gestarse

desde ya donde quiera que el pueblo se organice para luchar por sus problemas específicos y dondequiera que se desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo.

Una vez aprobado el programa, los partidos de la Unidad Popular suscribieron públicamente un pacto comprometiéndose ante el pueblo a llevar adelante los objetivos acordados, los cuales «están decididamente vinculados a un nuevo concepto de la conducción del país, que el Gobierno Popular se propone poner en práctica».

Finalmente, en un tercer documento denominado «Acuerdo sobre conducción y estilo de la campaña» se prevé el enfrentamiento social como la inevitable culminación del proceso revolucionario. Las fuerzas populares -enfatiza- no patrocinarán una confrontación artificial, pero «la agudización de las contradicciones del sistema provocarán un enfrentamiento cada vez mayor, que elevará las luchas de las masas a superiores niveles, planteándose final y necesariamente el problema definitivo de la conquista del poder».

El mismo documento reitera el papel asignado a los comités de Unidad Popular como expresiones «germinales del poder popular», los cuales, después de la victoria, estaban llamados a convertirse en «factores dinamizadores y de dirección local de los procesos de cambios revolucionarios».

Como puede apreciarse, existe un lineamiento central coherente en los documentos adicionales suscritos por los partidos populares. Éste incide en la concepción esencial de la conquista del poder y en el papel medular desempeñado por las masas en la construcción de ese poder. No se trataba de una simple convergencia para cumplir sólo una etapa antimperialista y democrática, como se ha pretendido, sino transitar más allá por las rutas que conducían «a iniciar la construcción del socialismo».

EL PROGRAMA DE LA UP

En Chile se dispensó siempre una general indiferencia a los programas de gobierno. Éstos servían sólo para alimentar el caudal de promesas destinadas a atraer al pueblo y se extinguían en el olvido, una vez alcanzada la victoria.

Los partidos de la UP quisieron innovar y lo lograron. En realidad la unidad se sella en torno al programa y no a la persona del abanderado. Mucho antes de designarlo se elaboró un compromiso de gobierno cuidadosamente debatido durante largos meses por todos los integrantes de la futura coalición de gobierno. Sólo producido el acuerdo se procedió a elegir el candidato.

En consecuencia, el Programa Básico de la Unidad Popular no fue el resultado de una redacción precipitada para salvar la exigencia formal de una campaña presidencial. Lo que cuidadosamente allí se dice es lo que meditadamente se quiso decir.

Iniciada la campaña, el documento aprobado -impreso en un millón ejemplares- fue difundido en todo el país. Así el voto emitido en la elección de septiembre de 1970 fue un voto consciente e ilustrado. Todos, partidarios y adversarios, sabían a qué atenerse respecto al futuro Gobierno Popular.

El Programa Básico era -sin duda- un programa revolucionario. La burguesía chilena, no obstante estar habituada a su propia demagogia, reparó oportunamente en ello y le atribuyó la mayor seriedad. Así lo entendió también el imperialismo.

Sin embargo, en algunas organizaciones de la izquierda y del movimiento popular -por razones diferentes y desde ángulos contrapuestos- se minimizó sus aristas radicales, exhibiéndolo sólo como una plataforma de lucha, limitada a definir el reducido núcleo de los «enemigos fundamentales», ofreciendo en cambio un amplio regazo, capaz de cobijar a la inmensa mayoría de los chilenos «no afectados ni afectables».

De ello se desprenden no pocas conclusiones erradas.

¿Cuáles son los conceptos ejes y dominantes del programa popular? El primero, categóricamente explicitado: la conquista del poder.

El segundo, implícito en su contexto: la voluntad de alcanzarlo a través de los mecanismos institucionales existentes, en un decurso gradual y progresivo. La vía pacífica, aunque no directamente expresada, emana del conjunto de sus proposiciones.

Estos conceptos se infieren inequívocamente de los siguientes párrafos literales contenidos en el capítulo primero, denominado: «Poder Popular»

Las trasformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo toma en sus manos el poder *y* lo ejerce real *y* efectivamente.

Las fuerzas revolucionarias y populares no se han reunido para luchar por la simple sustitución de un presidente por otro, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige, sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado *y* sectores progresistas de las capas medias de la ciudad *y* del campo.

El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del país.Señala a continuación como una de las tareas más importantes del Gobierno Popular la de «trasformar las instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder».

Todas estas formulaciones convergen en la idea central: crear un poder popular, nuevo, diferenciado, cuyo principal protagonista son los trabajadores. En otras palabras, sustituir el Estado burgués, instrumento de poder de las clases dominantes, por un nuevo Estado, expresión de los intereses del proletariado y sus aliados.

A partir de este objetivo cardinal, el programa señala la vía escogida.

El gobierno garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad de domicilio y los derechos de sindicalización y de organización, regirán efectivamente, sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes.

Más adelante desarrolla la tesis de la participación de los trabajadores en las decisiones de los órganos del poder y el de la extensión de los derechos y garantías democráticas vigentes, asegurando «a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado».

Finalmente, se garantiza a la oposición el «respeto pleno de los derechos que se ejerzan dentro de los marcos legales».

El Programa de la UP planteaba así el objetivo revolucionario de la conquista del poder, el establecimiento de un nuevo Estado con diferente carácter de clase, y «el inicio de la construcción del socialismo» para el período indicado en el programa.

En el amplio debate promovido en torno al Programa Básico, el Partido Socialista planteó la exigencia de iniciar la construcción del socialismo como tarea del Gobierno Popular y no como simple perspectiva histórica. Esta posición era antagónica a la enunciada por el Partido Comunista, según el *cual* «la revolución chilena, por su esencia y objetivos, es antimperialista, antimonopólica y agraria y con vistas al socialismo».

Veamos, de acuerdo con el programa, ¿a quiénes se traspasa el poder? ¿y quiénes son los beneficiarios de este traspaso?

El programa lo señala taxativamente: «a los trabajadores, el campesinado y los sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo».

Si queremos ser rigurosos, debemos reparar en el carácter restrictivo del concepto transcrito. Se trataba de traspasar el poder sólo a los sectores progresistas de las capas medias «no a todas las capas medias». En una palabra, aquellos que por su comportamiento político estaban en condiciones de adherir a un proceso revolucionario, subentendiendo la presencia de otros estratos hostiles a él.

¿Cuáles eran los objetivos de la conquista del poder?

La respuesta fluye del contexto del programa. El propósito era realizar trasformaciones revolucionarias en «el orden institucional», en «la organización de la justicia», en «la estructura y concepción de la defensa nacional», en «la organización de una nueva economía», en «la cultura», en «la educación» y en «el plano de las relaciones internacionales».

En el plano institucional se plantea que la nueva estructura del poder se «construiría desde la base», a través de un proceso de democratización y de una movilización organizada de las masas. Una nueva Constitución política legitimaría «la incorporación masiva del pueblo al poder estatal» y una «Asamblea del Pueblo», expresión máxima de la soberanía, reemplazaría al anacrónico sistema bicameral.

Se propugnaba una reestructuración sustancial de la organización de la justicia, estableciendo que los miembros de la Corte Suprema serían designados por la Asamblea del Pueblo, y no a través de un sistema de autogeneración, como lo prescribía la carta fundamental.
Como puede apreciarse, se proponía un cambio radical de todo el andamiaje institucional chileno. Nada permanecía intocado. El obsoleto Estado burgués sucumbía ante «la incorporación masiva del pueblo al poder estatal.

En la construcción de la nueva economía -por supuesto planificada- su objetivo central era reemplazar la estructura económica vigente «terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo».
Núcleo capital de la trasformación económica era la constitución de un área estatal dominante: «el Área de Propiedad Social». Ésta debía conformarse con las empresas nacionalizadas de la gran minería del cobre, salitre, hierro y carbón; todo el sistema financiero, en especial la banca privada y los seguros; la totalidad del comercio exterior; los monopolios industriales estratégicos y, en general, «aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país».

Junto a la proyectada área social dominante, la cual cubría la mayor parte de la actividad económica nacional, se establecían los límites de un área mixta y otra de propiedad privada.

Una importante tarea programática era también la profundización de la Reforma Agraria, estableciéndose tres sistemas de tenencia de la tierra: las cooperativas, que pasaban a ser hegemónicas; la propiedad individual y las empresas estatales.

En el orden educacional, se propugnaba un sistema democrático, único y planificado, orientado a entregar «las más amplias y mejores oportunidades educacionales». Disponía la estructuración de «una escuela unificada» (básica y media) ; impulsaba métodos destinados a enfatizar la incorporación activa y crítica de los estudiantes y garantizaba la participación de maestros, trabajadores, estudiantes, padres y apoderados en la trasformación del sistema. Finalizaba señalando que «el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por aquellos planteles que seleccionan sus alumnos por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa».

De otra parte, tampoco se olvidaba reglamentar la orientación y propiedad de los medios de comunicación de masas al determinar que «deberá imprimírsele una orientación educativa y liberarlos de su carácter comercial, adoptando medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios, eliminándose de ellos la presencia nefasta de los monopolios». En otras palabras, se establecía que la radio, la TV, las empresas editoriales, la prensa y el cine, deberían abrirse a las «organizaciones sociales», es decir, a los trabajadores, y se prohibía su dominio por los monopolios.

Finalmente, en el capítulo de la política internacional se consignaba: la autonomía política y económica de Chile; establecer relaciones con todos los países del mundo; fomentar vínculos de amistad y solidaridad con todos los pueblos; promover un fuerte sentido americanista y antimperialista, a través de «una política internacional de pueblos antes que de cancillerías»; denunciar a «la *OEA* como instrumento y agencia del imperialismo norteamericano»; y finalmente «la revisión, denuncia o desahucio», según los casos «de los tratados o convenios que signifiquen compromisos que limiten nuestra soberanía» *y* concretamente, «el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) , *y* el Pacto de Ayuda Mutua y otros pactos que Chile ha suscrito con Estados Unidos».

UN VACÍO INEXCUSABLE

Éste era el programa de la UP. Como puede observarse, un programa extraordinariamente radical, dirigido contra todos los núcleos de dominación externa e interna y concebido para que el bloque político victorioso, liderizado por la clase obrera, iniciara la trasformación revolucionaria del país.

A nuestro juicio, lejos de ser un diseño reformista -hay quienes lo sostienen-, asume en su texto y en su intención profunda, las características de un programa auténticamente revolucionario. Aun aquellas medidas clásicas en una experiencia reformista moderna, adquieren indudable connotación revolucionaria en un proyecto cuyo objetivo último era el traspaso del poder de una clase a otra. Nunca antes, en ningún país del mundo, fue sometido a la decisión soberana del sufragio un programa tan avanzado.

Más allá de la precisión de los enemigos fundamentales -el capital monopólico nacional, el imperialismo, y el latifundio-, está el objetivo estratégico explícito: la trasferencia del poder detentado por las clases explotadoras a las clases explotadas. Éste es el acto revolucionario por excelencia. En consecuencia, él condiciona toda la profundidad, alcance y extensión de las medidas propuestas. Una reforma agraria masiva, realizada en un contexto de trasformaciones radicales de la estructura económica y dentro de la perspectiva de traspasar el poder de una clase a otra, no es una disposición reformista. No lo es tampoco -en el mismo marco- la nacionalización de las riquezas naturales. Ni la creación de un área de propiedad social que debía comprender la parte más vital de la economía nacional. Ni el término del control de los monopolios sobre los medios de comunicación de masas. No obedece tampoco a una concepción reformista, propugnar un ordenamiento institucional que avienta del poder a las viejas clases oligárquicas y plantea, en su remplazo, la construcción de un nuevo Estado gobernado por los desposeídos. Incluso es revolucionario, en el ámbito de lo que había sido la evolución política de Chile, «hincarle el diente» al Poder judicial, quien ajeno a la permanente modernización del sistema, había permanecido intocado, como nostálgica reminiscencia de la *belle éooque* de la oligarquía chilena.

Sin embargo, más allá de sus categóricas formulaciones, los documentos programáticos acusaban un vacío de extraordinaria trascendencia: no señalaban los mecanismos concretos para alcanzar los objetivos revolucionarios planteados. Ésta fue su mayor deficiencia. Es esta omisión la que resulta decisiva en la manifestación de ulteriores divergencias estratégicas en la conducción del proceso revolucionario.

Por lo que concierne a nuestro partido, la correspondiente apreciación estratégica fue formulada en 1967, en el Congreso de Chillán, al señalar que sólo «la destrucción del aparato burocrático militar del Estado burgués puede consolidar la revolución socialista y que las formas políticas y legales de lucha no conducen por sí mismas al poder». De esta manera, a contar de la victoria de septiembre de 1970 y la constitución del Gobierno Popular, el Ps evaluó la situación, constatando el surgimiento de «nuevas y favorables condiciones», que permitían «predecir el acrecentamiento a pasos agigantados de una situación revolucionaria», la cual planteaba inexorablemente «la conquista del poder».

Si aceptamos que los mecanismos capaces de permitirnos alanzar los objetivos programáticos señalados estaban implícitos en la concepción de un tránsito pacífico e institucional, y que el sistema democrático representativo facilitaría la ejecución de las trasformaciones propuestas, debemos concluir que el programa sólo era realizable en cuanto se lograra la mayoría electoral necesaria. En otras palabras, se trataba de un proyecto sujeto a la condición de que las fuerzas revolucionarias obtuvieran en los comicios la mayoría absoluta de los sufragios y que esta mayoría fuera respetada por la reacción. Quedaba en pie, como opción hipotética, la concertación de una alianza política con la Democracia Cristiana. Opción casi imposible cuando el objetivo último del programa

era tan ambicioso como: «el traspaso del poder», «la incorporación masiva del pueblo al poder estatal» e «iniciar la construcción del socialismo».

Si en los hechos se pudo ir tan lejos -mucho más de lo previsible- en la construcción de la nueva economía y en la trasformación de la sociedad, fue simplemente porque no se requería de una mayoría parlamentaria. Para la nacionalización del cobre existía un abrumador consenso nacional. En la reforma agraria era posible utilizar la legislación vigente con relativa eficacia. Finalmente, no debe olvidarse que el área social de la economía toma consistencia mediante la aplicación de los mecanismos legales de requisición e intervención, contemplados en un decreto con fuerza de ley, promulgado cuarenta años antes por la «República Socialista», decreto rescatado del olvido por un modesto funcionario y aplicado por un talentoso jurista de la Unidad Popular.

La experiencia chilena ha puesto de manifiesto la importancia que asume la formulación de un programa correcto, que aglutine a las masas ofreciéndoles una alternativa real de poder. No obstante, también nos ha enseñado que ello no es suficiente. La claridad programática debe tener un correlato en la claridad operativa. La vanguardia revolucionaria debe saber «qué hacer», pero también tiene la obligación de prever «cómo hacer». En Chile pretendimos solucionar este problema en el curso del proceso. El desenlace demostró, y sigue demostrando, que el problema de la vía no es un problema subalterno, cuya solución puede improvisarse, en el desarrollo mismo de la experiencia revolucionaria.

3. LOS MIL DÍAS DE LA UNIDAD POPULAR

La Unidad Popular fue victoria. El pueblo que siempre se había asomado por la puerta de servicio a los triunfos electorales de la burguesía, irrumpía finalmente en el Palacio de los Presidentes. El triunfo, tantas veces esquivo, alzaba las banderas populares. La esperanza de los desposeídos, hasta entonces clandestina, volaba por los caminos de Chile presagiando la perspectiva de una vida más digna y generosa. Mientras tanto, la burguesía estupefacta diluía su arrogancia centenaria para esconder el pánico tras los ventanales herméticos de sus mansiones.

En la madrugada del 5 de septiembre de 1970, el pueblo interrumpió su alegría desbordada para escuchar al nuevo Presidente. Allende, en elocuente improvisación, resumía así la grandeza y proyección del triunfo

Han sido el hombre anónimo y la ignorada mujer de Chile los que han hecho posible este hecho social trascendente. Miles y miles de chilenos sembraron con su dolor y su esperanza esta hora que al pueblo pertenece. Y desde otras fronteras, desde otros países, se mira con satisfacción profunda la victoria alcanzada. Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir. La fuerza vital de la unidad romperá los diques de las dictaduras y abrirá el cauce para que los pueblos puedan ser libres *y* puedan construir su propio destino. Dije *y* debo repetirlo: si la victoria no era fácil, difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia social, la nueva moral y la nueva patria.

Aquella noche -en medio de una irresistible explosión de júbilo culminaba un largo proceso de luchas políticas y sociales. Desde principios de siglo los trabajadores habían estado presentes en el quehacer político nacional. Su influencia y sus combates contribuyeron decididamente al desarrollo de una democracia avanzada, fortalecida con un amplio sistema de derechos cívicos, de garantías individuales y sociales y con un régimen eficiente de seguridad social.

Al iniciarse la segunda mitad del siglo, la clase obrera, ya madura y poseedora de una elevada conciencia de clase, diseña su propio proyecto histórico y construye su propia fuerza. A partir de su unidad política, expresada en el entendimiento de los partidos obreros y de su unidad social, manifestada en la Central única de Trabajadores, inicia a paso seguro «su marcha de gigante» hacia la conquista del poder.

La victoria de 1970 sorprende a la humanidad entera. La ortodoxia parecía romperse ante la experiencia histórica inédita escrita en un país pequeño y distante. Un vasto movimiento popular, cuyo eje lo conforman dos poderosos partidos marxistas obreros, advenía al gobierno con un programa revolucionario que establecía explícitamente la voluntad de «iniciar la construcción del socialismo». Y lo más sorprendente: ello era posible a través del sufragio universal.

El asombro es justificado. El triunfo de la UP coloca por primera vez en la historia de las luchas sociales al proletariado y sus aliados en aptitud de disputar, desde el centro mismo del Estado, el poder a la burguesía nacional y al imperialismo. La tarea asumida por el gobierno de Salvador Allende constituye un desafío a la experiencia histórica universal, al pretender construir una vía al socialismo «en libertad, pluralismo y democracia», o dicho en otros términos, trasformar la vieja estructura capitalista usando una institucionalidad cuyos supuestos ideológicos están enraizados en la más pura tradición liberal. Chile, como lo dijera en alguna oportunidad el propio Allende, se encontraba ante el reto «de iniciar una nueva manera de construir una sociedad socialista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada». Era «la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista» (Mensaje al Congreso Nacional, 21 de mayo de 1971.)

El triunfo de la Unidad Popular enfrentó a sus partidos a una responsabilidad gigantesca. El cumplimiento del programa significaba arremeter contra los intereses imperialistas, enclavados en el centro de su economía, contra los grandes consorcios financieros, los monopolios industriales y el latifundio. Se trataba de disparar al corazón del sistema, destruirlo y organizar una nueva economía y un nuevo Estado.

La tarea debe ser encarada en un contexto extraordinariamente adverso. Nace horquillada por las limitaciones naturales de una institucionalidad burguesa y por la formidable Ofensiva del adversario, orquestada y alimentada por el país más poderoso de la tierra.

A pesar de ello, el balance del esfuerzo realizado nos permite hacer una afirmación aparentemente pretenciosa: en tres años el Gobierno Popular hizo avanzar al país lo que en décadas no lograron las anteriores administraciones conservadoras o reformistas.
Este espectacular avance se materializa en el escenario de una guerra abierta y declarada, en la cual -sucesiva y alternativamente se utilizan todas las armas del arsenal burgués imperialista. El mundo conoció la magnitud de la embestida desplegada para hacer abortar la experiencia chilena. Todos los recursos fueron legitimados: el crimen, el terrorismo y el sabotaje; la asfixia financiera y el chantaje internacional; la obstrucción institucional y la provocación artificial del caos económico. Era el «Vietnam silencioso» del cual hablaba el presidente Allende.

A pesar de todo ello, sobrevive una labor increíble, vista en perspectiva histórica. Durante tres años de lucha enconada, se construye una obra que la historia de Chile -a no dudarlo- mantendrá como punto cardinal de referencia futura.

No pretendemos hacer un balance exhaustivo de las imponentes realizaciones materiales y de las trasformaciones radicales abordadas en el curso del proceso. No es el objetivo ni la intención de este libro. Solamente deseamos consignar algunos aspectos de esa obra, fundamento de nuestra íntima convicción sobre cuál ha de ser el juicio último de la historia. Indudablemente no será posible escribirla, prescindiendo de los mil días luminosos protagonizados por la heroicidad de un pueblo, la conciencia revolucionaria de su clase trabajadora y la decisión de lucha de las masas.

Una visión de conjunto de la tarea realizada, demuestra cómo usando hasta el límite los elementos institucionales disponibles, se cumplieron los tres más importantes objetivos económicos del programa propuesto: la nacionalización del cobre y demás recursos naturales, la constitución de un área social dominante, y la destrucción del latifundio.

El gobierno de Allende recuperó para Chile la totalidad de las riquezas extractivas. El cobre, el hierro y el salitre retornan al patrimonio de la nación al amparo de un estatuto jurídico cuya singularidad alcanzó resonancia más allá de las fronteras nacionales.

Las empresas imperialistas dueñas del cobre, Kennecott y Anaconda, durante más de 50 años de explotación intensiva, habían retirado del país utilidades equivalentes a la mitad del patrimonio físico acumulado en 160 años de vida republicana. Cuatro mil millones de dólares. Éste fue el fundamento moral y económico de la decisión del gobierno, ratificada por el Congreso Nacional: deducir de las indemnizaciones correspondientes las rentas que en concepto de la ley fueron estimadas excesivas.

Por primera vez en un país dependiente se aprobaba un procedimiento legal en cuya virtud se realiza un balance global de las actividades de un empresario extranjero, determinando su debe y su haber en la economía del país. La llamada «Doctrina Allende» introduce un elemento nuevo en las prácticas expropiatorias. La noción de una renta establecida, de acuerdo a normas financieras y éticas razonables, cuestiona de hecho las inversiones imperialistas en todo el mundo. (La legislación expropiatoria consideró «rentabilidad excesiva» aquella que excedía de un *12%* anual.) Fácil es comprender entonces la envergadura de esta medida y el grado de coraje moral necesario para imponerla.

Junto a las compañías productoras de cobre, el gobierno nacionaliza otras empresas bajo control norteamericano e interviene la Compañía de Teléfonos de Chile, filial criolla de la ITT.
La reforma agraria, apenas iniciada durante el gobierno de Frei, se profundiza hasta casi liquidar el latifundio. Él había conformado el régimen productivo de la tierra y tuvo una expresión relevante a lo largo de la evolución político social de Chile. La oligarquía agraria impuso su sistema de vida durante todo el siglo xix y parte del xx.

En el plano social, alcanza especial significado la definitiva incorporación del campesinado a las luchas políticas, cuyo despertar venía evidenciándose en años anteriores, al calor del ascenso del movimiento popular.

El esfuerzo fundamental para la estructuración de la nueva economía y en torno al cual se centró la más encarnizada ofensiva reaccionaria, fue la constitución del Área de Propiedad Social. Ésta era una medida esencial para iniciar la construcción del socialismo. De allí su énfasis en el programa popular y la rabiosa oposición burguesa. El área social dominante se configuró con los grandes monopolios mineros, industriales, financieros y de distribución y las llamadas empresas estratégicas. Inicialmente se estatizaron las más importantes empresas textiles, metalúrgicas, petroquímicas y de alimentos básicos.

Durante el Gobierno Popular, el Estado asume el control de los bancos privados, nacionales y extranjeros *(96%* del crédito bancario).

Las funciones de éstos se orientan en beneficio de los medianos y pequeños industriales, mineros y agricultores, a la par que se rebaja significativamente la tasa del interés. En Chile las instituciones bancarias eran los principales vehículos de un imperio integrado por once «clanes económicos», los cuales concentraban la mayor parte del poder industrial, comercial y financiero de la burguesía.

Paralelamente, el gobierno se desplazó sobre todas las actividades de la sociedad, implementando medidas de beneficio popular, todo ello en el marco de trasformaciones radicales de la estructura económica.
Fue impuesta una drástica redistribución de ingresos a través de la política de precios, sueldos y salarios, medidas tributarias y mejoras sociales encaminadas a satisfacer las necesidades fundamentales de la población. Durante los dos

primeros años se logró un aumento espectacular de la producción industrial (12%) y una disminución sustancial de la cesantía.

El incremento del consumo no fue sólo concebido con un propósito social, sino también como un recurso técnico para expandir la producción.

En el plano social la actividad fue igualmente significativa.

Los servicios de salud se perfeccionaron, ampliándose en términos no conocidos en el país. Fue entregado gratuitamente medio litro de leche diario a todos los niños de Chile y los policlínicos periféricos fueron puestos sin costo al servicio de toda la población. La tasa de mortalidad infantil descendió considerablemente, al amparo de una adecuada política de protección a la madre y al niño.

El nuevo régimen intensificó aceleradamente la construcción de viviendas populares, llegando a duplicar los metros cuadrados edificados en comparación con el quinquenio anterior.
La educación recibe un impulso vigoroso, expresado en su extensión masiva a toda la población escolar, en la reducción significativa del analfabetismo (12% en 1971 y 10.8% en 1972) y en la ampliación considerable de las matrículas en todos los niveles de la enseñanza.
Las pensiones mínimas de vejez, invalidez y viudez del Servicio de Seguro Social aumentaron en un 550% entre 1970 y 1972. Se nivelaron las asignaciones familiares. Trescientos mil ancianos jubilados elevaron sus ingresos desde un tercio a un salario mínimo completo. La previsión fue extendida a 130 mil pequeños comerciantes, 200 mil feriantes, 30 mil pequeños industriales y artesanos, a los deportistas profesionales, actividades conexas y transportistas.
Durante el año 1971, el producto nacional bruto experimenta un crecimiento jamás conocido en la historia del país: 8.3%. En el año siguiente, no obstante las dificultades surgidas, el índice es aún alto: 5%. Dos sectores decisivos, industria y construcciones, aumentaron en un promedio superior al 10 y 8% respectivamente. Por su parte, la minería del cobre, a pesar de los problemas generados por su nacionalización, no interrumpe su crecimiento.

Por otra parte, los intelectuales progresistas se agitan en la búsqueda de nuevos valores, consecuencia de un proceso social donde el proletariado por primera vez asume un papel protagónico. Esa búsqueda se da en todas las manifestaciones de la cultura y, desde luego, con un mayor grado de decisión en la Universidad. Se trata de encontrar una coherencia estratégica entre los nuevos objetivos planteados por la revolución y una cultura, que recoja las aspiraciones y el pensamiento de los trabajadores y contribuya a erosionar y destruir en la superestructura los viejos esquemas de la burguesía. El diálogo intelectual y científico alcanza sus más altos niveles, y la Universidad, dinamizada por los sectores democráticos y progresistas, asume la tarea de satisfacer las necesidades culturales, científicas y tecnológicas de nuestro pueblo. La crítica, el afán de conocimiento de la realidad, la creación literaria y artística expresan el empeño de la intelectualidad chilena por recuperar el carácter nacional de la cultura. Con razón ha dicho Cortázar: «Lo que vi en las universidades a través de diálogos con estudiantes y profesores, me confirmó en la certidumbre de que el gobierno de Salvador Allende y sus asesores en el plano de la educación y de la cultura habían visto lo que en su día también viera de manera ejemplar el gobierno revolucionario cubano, al proponerse no sólo la liberación exterior y física del pueblo, sino era otra liberación igualmente difícil de conseguir: la de la mente, la de la sensibilidad frente a la belleza, la lenta y maravillosa conquista de la identidad personal, de la auténtica capacidad de ser un individuo, sin la cual no es posible consolidar y defender la liberación exterior y la soberanía popular.» (Julio Cortázar. Declaración ante la Tercera Sesión de la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la junta Militar de Chile. México, 18 de febrero de 1975.)

La labor del Gobierno Popular se orienta tras esa tarea. En septiembre de 1971 se crea la Editorial Quimantú. En sólo dos años se editan 12 millones de ejemplares de libros, revistas populares y especializadas, y documentos diversos. Los libros impresos incluían una temática variada, que iba desde el análisis social y educacional hasta la historiografía chilena y latinoamericana, a -la par que las obras más relevantes de la literatura universal. Las ediciones populares de obras literarias se agotaban rápidamente, a veces el mismo día de su aparición.

A niveles populares, se generó una extraordinaria inquietud intelectual. Recogiéndola y en el objetivo por atender la exigente demanda, Quimantú encaminó su esfuerzo a la organización de bibliotecas en los sindicatos, organizaciones poblacionales, deportivas y juveniles.

La misma orientación fue proyectada sobre los limitados medios de comunicación que la up logró controlar. Una experiencia política significativa se vivió en torno al funcionamiento del canal 9 de la Universidad de Chile. Allí, los trabajadores de izquierda enfrentaron la administración derechista de la Universidad y dieron a los programas un contenido cultural e ideológico comprometido. La pugna en torno al control del canal, que la burguesía pretendió persistentemente silenciar, es uno de los episodios más relevantes de los cambios operados en la conciencia de los trabajadores. Ellos mismos lo financian; cuando la rectoría de la universidad decide privarlo de recursos, determinan directamente su programación, y cautelan físicamente su funcionamiento cuando el terrorismo fascista arrecia.

En todos los planos de la actividad artística, la imaginación creativa se expresa en niveles antes desconocidos. La influencia popular se deja sentir en la pintura y en la música. Aparecen los murales, creación simple y directa del pueblo, inicialmente con un objetivo propagandístico. A través de todo el país las consignas del movimiento popular adquieren expresión plástica en calles y edificios. Paulatinamente se va perfeccionando su estilo y su contenido en la emulación fraternal de los diferentes grupos que proliferan en el cultivo de la nueva manifestación artística. Terminan por convertirse en un virtual medio de comunicación popular a nivel nacional. Sobre los murales del pueblo la burguesía volcará posteriormente todo su profundo odio de clase.

Los valores auténticos del folklore fueron reivindicados al calor del nuevo impulso. Sobre las estructuras autóctonas alcanza un vigoroso desarrollo la música de protesta, música contestataria, de combate, expresión vital de la experiencia revolucionaria. Ella recoge los combates de la clase obrera, difunde sus tradiciones y las engarza con las nuevas alternativas de la lucha. Algunos de sus cultores logran una excelente jerarquía artística. Víctor Jara -por ejemplo- paga con su vida el compromiso de su poesía y de su canto. Otros, como el conjunto Quilapayún y los Intillimani, continúan hoy a través del mundo estimulando la solidaridad internacional y difundiendo la lucha de nuestro pueblo por sobremontar la pesadilla fascista.

Finalmente, el premio Nobel, otorgado al gran poeta americano Pablo Neruda, fue también el premio a la más gloriosa poesía de lucha libertaria escrita por el pueblo chileno.

Durante el Gobierno Popular, Chile alcanzó una audiencia internacional de la que antes nunca gozó. El país se abre al mundo en el desarrollo de una política exterior autónoma. Las primeras medidas del gobierno constituyen una afirmación de su soberanía plena: a despecho de la Casa Blanca, se establecen relaciones con las naciones «proscritas»: Cuba, China, R.D.A., Vietnam, la República Popular de Corea.

Durante tres años, Chile tiene estatura y presencia internacional. La humanidad está extraordinariamente atenta al original proyecto de liberación social y nacional que se desarrolla en sus fronteras. Su voz se eleva con particular prestigio y gravitación entre los países no alineados. Santiago es sede de importantes eventos internacionales. El presidente Allende viaja al extranjero y es aclamado por los pueblos que ven en él la dimensión de un líder continental. Su voz se hace oír acusadora en el seno de las NU, para denunciar la agresión de que éramos objeto y el drama del Tercer Mundo. Los representantes de la humanidad allí reunidos, le escuchan en silencio y le ovacionan de pie.

Así juzgaba el mundo a Chile. Lo hemos percibido recién después de la derrota. La inmensa solidaridad, resuelta y sostenida, en torno a la tragedia que vive nuestro pueblo, no es ajena al sitial que Chile conquistó en el concierto de las naciones. El Chile de hoy, hace más relevante la jerarquía del de ayer. Un Chile aislado y repudiado internacionalmente, al que la humanidad elude, y cuya presencia se mantiene sólo por la magnitud del crimen y del terror. La dimensión del desprestigio está brutalmente simbolizada en la inmovilidad física de un tirano, que apenas es recibido en la madriguera de alguno de sus congéneres, y cuya presencia resultó desdorosa incluso a los fascistas españoles.

Fue esta una inmensa tarea para un gobierno que debió construir superando obstáculos de todo orden. Indudablemente el balance arroja un saldo espectacular si se le mide en el marco de factores coyunturales sobrevinientes que confluyeron a asfixiar su esfuerzo: una baja violenta y sostenida del precio del cobre en el mercado internacional; la paralización de la inversión foránea y una gran restricción de la nacional, y un fuerte bloqueo financiero impuesto por los organismos internacionales y privados extranjeros. En los dos últimos años, el Gobierno Popular debe además absorber el alza del precio internacional de los productos agropecuarios y de diversas materias primas.

Parece justo preguntarse: ¿Qué país ha desarrollado un proceso tan profundo de trasformaciones estructurales al ritmo que lo hizo la Unidad Popular, sin enfrentar -por esa sola circunstancia- una dislocación de sus actividades económicas?

Lo concreto es que en Chile, pese a los poderosos agentes externos e internos mancomunados en la faena de anarquizar y destruir la economía del país, ésta no sólo se mantuvo sino aumentó su ritmo durante los años 1971 y 1972. La desarticulación se produce básicamente cuando el imperialismo y la burguesía, devenida en burguesía especulativa, estimulan planificadamente el caos económico; administran el mercado negro; promueven y financian la subversión empresarial y el terrorismo; crean deliberadamente desde el Parlamento factores de presión inflacionaria; y finalmente amarran las manos del gobierno, impidiéndole enfrentar en el plano de la institucionalidad la situación artificialmente provocada.

Los resultados antedichos no hubieran sido posibles sin un aporte, en términos de capacidad, compromiso, imaginación creadora e incluso eficiencia, compartido por todos los niveles de dirección del proceso. Mandos altos y medios descubren una gigantesca capacidad realizadora, sin precedentes en la historia de Chile. No se habrían alcanzado, de otra manera, los extraordinarios índices de producción, salud, construcción y educación. Todo ello a despecho del empeño de la burguesía por producir el caos, la anarquía y la inseguridad.

Pero el impulso trasformador no puede ser atribuido solamente a la decisión y consecuencia revolucionaria de las vanguardias. Por encima y más allá de ellas, estuvo siempre presente el protagonista principal del proceso: el pueblo.

El creciente conflicto social y la aguda lucha de clases libera toda la potencialidad creadora y el espíritu combativo de las masas. Participan en la conducción del proceso y exhiben allí toda la inmensa variedad de sus aptitudes. Cuando el adversario cerca la economía,, los trabajadores se movilizan para reactivarla; cuando los patrones paralizan sus industrias, la clase obrera las ocupa de inmediato poniéndolas en marcha con eficiencia sorprendente; cuando la burguesía ahíta de odio destruye, el pueblo con la alegría inmensa de una obra que la sabe propia, construye.

En el gobierno de Allende el pueblo palpó la expresión cabal de sus intereses. Comprende desde la primera hora que las deficiencias de conducción en el desarrollo de su propia participación, en el manejo del poder y en la dinámica misma de la lucha, serán superadas. Entiende el proceso, como la vivencia de una empresa revolucionaria que la historia medirá, más allá de sus errores, por la grandiosa experiencia escrita.

Hasta el instante mismo de la derrota multiplicará incansablemente su energía creadora en centros vecinales, comités campesinos, juntas de abastecimiento, comandos comunales, cordones industriales; en incipientes órganos de defensa del proceso.

Jamás un pueblo vivió instantes de mayor exaltación nacional, de mayor motivación colectiva. Frente a la burguesía torva, intoxicada por el rencor, poseída por un odio irracional de clase, el pueblo daba su lucha con la alegría plena de saberse parte de una vida que antes siempre se le mostró ajena. Mientras el enemigo vomitaba resentimiento, los trabajadores llenaban los aires de Chile con su canto de victoria.

Esta es en definitiva la gran obra de la Unidad Popular, indestructible y luminosa. Un pueblo entero conoció la dignidad y se asomó a una vida nueva. Tuvo conciencia de su fuerza y selló el supremo compromiso de clase. Esa conciencia sí es irreversible. No habrá perversidad capaz de destruirla.

El juicio definitivo de la historia deberá medir esta obra en el contexto de sus inmensas dificultades. Fue destruida, según afirmaron, para «reconstruir Chile». La comparación resulta casi grotesca. El fascismo ha tenido también sus mil días. Ejerciendo un poder omnímodo; con el gigantesco aporte del imperialismo: más de tres millones de dólares diarios; con un elevado precio promedio del cobre; sacrificando los niveles de vida de la población hasta extremos inauditos; y veamos sus propios resultados: un país demolido, su sociedad quebrada, su cultura oscurecida, internacionalmente rechazado; con ciudadanos sin derechos individuales ni colectivos; cuyos trabajadores han sido despojados de conquistas logradas a través de medio siglo de luchas y combates; con sus universidades jibarizadas. En el plano económico los resultados no son menos desastrosos: el PNB, en promedio, durante los últimos tres años se ha reducido hasta índices de menos cero; la inflación, también en promedio, es superior al 400% anual; la cesantía se eleva sobre el 20%. Ésta es la obra del fascismo y de su socio: el gobierno de EU.

4. LA VÍA PACÍFICA Y EL PROCESO REVOLUCIONARIO

LA VÍA: ¿PROBLEMA TÁCTICO O ESTRATÉGICO

Hay quienes sostienen en el seno de la izquierda chilena que la determinación del carácter de la vía armada o no armada es sólo un problema táctico, sujeto a la correlación de fuerzas en las coyunturas decisivas de la lucha por el poder. De ello se desprendería, que construir una estrategia revolucionaria resolviendo anticipadamente si habrá o no insurrección armada, es innecesario.

Dilucidar este tema tiene máxima relevancia, no sólo en el recuento del pasado, sino en el contexto de un debate proyectado sobre el quehacer futuro del movimiento popular. La vía es una previsión estratégica indispensable en todas las fases del desarrollo de la lucha revolucionaria.

Los grandes pensadores marxistas siempre previeron una vía probable. Ella no puede minimizarse al extremo de convertirla en una «especie de sonrisa de la esfinge o en una respuesta que se guarda hasta el último día en la rodilla de los dioses» (Rodney Arismendi, La Revolución y América Latina).

Lenin prevé la vía de la Revolución rusa con doce años de antelación, y además formula la consigna de la «insurrección armada» no como un llamamiento directo, sino como una conclusión indispensable. (Dos tácticas, 1905.*)* Definir la evolución probable del proceso en el escenario de la realidad concreta es obligación ineludible de la dirección. Es también imprescindible para la preparación subjetiva de las masas y de los cuadros revolucionarios.

Uno de los más sólidos teóricos del marxismo-leninismo en América Latina, el secretario general del PC uruguayo, Rodney Arismendi, expone el problema en los siguientes términos:

En un período de preparación (nosotros usamos como equivalente otra categoría usada también por los clásicos: período de acumulación de fuerzas) y cuya duración en la Rusia de entonces fue de varios años, Lenin no sólo prevé la vía insurreccional, sino que la propaga en lucha contra el seguidismo, que rebaja los objetivos revolucionarios del proletariado, entre otras cosas negándose a plantear el problema de las vías; como contra el «revolucionario vulgar» (putschista y aventurero) que grita «al asalto» en cualquier circunstancia de tiempo y lugar, y que menosprecia estúpidamente la agitación y la propaganda en los períodos preparatorios, y agrega:

Y si muchas veces el dogmatismo supone absorber la táctica en el planteamiento general teórico, espectáculo habitual del infantilismo izquierdista, el oportunismo de derecha envilece casi siempre la teoría achatándola al nivel de una táctica...

Entendemos por cierto que la previsión del desenlace más probable de la pugna social no autoriza en modo alguno la renuncia al desarrollo de todas las formas de lucha. En otras palabras, la determinación de la vía estratégica no es incompatible sino, por el contrario, condición de una necesaria flexibilidad táctica.

La pretensión de rebajar un problema estratégico fundamental, a la categoría de una cuestión «hipotética, predictiva y secundaria», cuyas incógnitas las iría despejando el proceso, fue en definitiva la condicionante sustancial de la derrota del movimiento popular. (Jaime Gazmuri, Aprender las lecciones del pasado para construir el futuro, Santiago, Editorial Nueva Democracia, noviembre, 1974.) Si éste hubiera sido estudiado seria y oportunamente, considerando las leyes generales del marxismo, recogiendo las lecciones de la historia para prever las variantes posibles de la «vía chilena al socialismo», el destino del proceso hubiera sido diferente.

Perseverar después de la tragedia en el mismo error es sembrar el terreno de derrotas futuras.

VÍA PACIFICA Y VÍA ARMADA

Nos parece importante para el análisis correcto de la experiencia chilena ensayar algunas precisiones conceptuales. Las vías de acceso al poder conforman un área de la temática revolucionaria, en la cual no existen marcos de referencias claros, que definan con exactitud el alcance y contenido de éstas.

La vía pacífica -algunos prefieren denominarla «no armada»sería aquella que tanto en el curso del proceso como en su culminación, recurre a formas pacíficas de lucha. Supone, básicamente, el desarrollo de la lucha de masas, el empleo de métodos legales y la utilización de la institucionalidad burguesa. El ciclo de tránsito del capitalismo al socialismo se cierra sin prever ni recurrir a la violencia, lo que no obsta a que ésta pueda darse en manifestaciones secundarias y objetivas.

Éste fue el camino escogido en Chile.

La vía armada, por el contrario, supone en todas o en alguna de las fases del proceso, el uso de la violencia revolucionaria. Es este el factor, que en último término, rompe la espina dorsal del régimen dominante, quiebra su aparato represivo. La vía armada puede utilizar durante un largo camino la institucionalidad burguesa y formas legales de lucha, pero prever -y aquí esta el quid del problema para las instancias decisivas del proceso, el empleo de la violencia. En consecuencia, configura este camino, no tanto el uso real de ella, como la previsión de este uso y la adecuación y preparación consecuente de la vanguardia revolucionaria, a esa eventualidad.

Después del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética se empezó a estimar la posibilidad de acceder al socialismo a través de métodos pacíficos y a configurar teóricamente la concepción de una vía no armada, cuyas exigencias no han sido precisadas en términos explícitos.

Aquellos que en el análisis objetivo de sus realidades específicas consideran la vía pacífica como factible, coinciden en la necesaria existencia de «una correlación que en un momento dado proporcione a las fuerzas transformadoras un poder abrumadamente superior al de los defensores del capitalismo». (Santiago Carrillo, Libertad y socialismo.) Dicho en otros términos, «la vía pacífica es posible solamente cuando es aplastante la prevalencia de las fuerzas revolucionarias», cuando se ha logrado «tal superioridad de fuerzas que se obliga a la burguesía a desistir de la violencia». (Kiva Maidanik, «En torno a las enseñanzas de Chile», Revista A. Latina, N° 2, Academia de Ciencias de la URSS.)

Éste es el «consenso» del cual nos hablan los comunistas italianos. La superioridad de fuerza, tanto social como política, demanda -con antelación a la destrucción del aparato represivo de la burguesía quebrar su bloque ideológico, con el fin de lograr el desplazamiento, al campo revolucionario, de la inmensa mayoría de las capas medias, dejando reducida, así, a la clase dominante a su expresión ínfima y natural.

Los partidos comunistas de Francia, Italia y España, especialmente los dos últimos, han estudiado en profundidad, las formas, mecanismos y situaciones condicionantes del tránsito pacífico al socialismo. Parten del supuesto de que no volverán a reproducirse en Europa las condiciones que hicieron posible, en la Rusia de 1917, a un partido pequeño en número, pero resuelto y preparado como el bolchevique, aprovechar el desplome del Estado autocrático-zarista, para tomar audazmente en sus manos la conducción del país. Ausentes aquellas premisas «tan extraordinariamente favorables», la situación revolucionaria «puede surgir como consecuencia de crisis políticas y sociales graves, a condición de que los partidos comunistas y el conjunto de las fuerzas revolucionarias, sean ya una «gran fuerza» preparada y consciente, de forma que el plus del factor subjetivo, contrarreste el minus del factor objetivo». (Santiago Carrillo, op. cit.)

Concebida así, la vía pacífica exige, no sólo conquistar una mayoría electoral, equivalente a un 51% de los sufragios, sino que esa mayoría sea de tal modo abrumadora, como para disuadir a la burguesía del uso de la violencia. La perspectiva de lograr esta fuerza aplastante, determina los lineamientos básicos de los más poderosos partidos comunistas de Europa occidental. A ella confluyen, el «compromiso histórico» del PC italiano; el «Pacto para la libertad» de los comunistas españoles y la «Unidad del pueblo francés» del PC de Francia.

En el empeño por ganar esa «inmensa mayoría», aquellos partidos han venido realizando un esfuerzo sostenido, orientado a destruir las fijaciones anticomunistas de amplios sectores de sus respectivas sociedades: se ha adecuado el lenguaje, se ha renunciado a viejos símbolos partidarios, se han desahuciado conceptos como el de la dictadura del proletariado, y se ha expresado la firme decisión de transitar al socialismo, ejerciendo los derechos democráticos «hasta el fin».

Así entendida la vía pacífica, acusa diferencias de importancia con la concepción que de ella tiene el Partido Comunista de la Unión Soviética. Sus ideólogos más relevantes aceptan la vía pacífica como una vía probable, pero insisten en que ella, no sólo debe construirse sobre una correlación de fuerzas favorables, sino además, en la capacidad y preparación de la vanguardia revolucionaria para alterar las formas de lucha en el momento mismo que ello fuera necesario y utilizar la violencia en defensa de la revolución amenazada.

Hay quienes han creído ver en la experiencia chilena una forma atípica de acceso al poder, en la cual se entremezclan su emergencia y desarrollo pacíficos, con un desenlace violento.

Disentimos de esta opinión. En rigor, la previsibilidad del enfrentamiento armado, y la necesidad consecuencial de adaptar orgánica, ideológica y militarmente el movimiento revolucionario a esa previsión, ubicaban el camino chileno, en la concepción de la vía armada, aunque su acción no se enmarcara durante todo el curso de los acontecimientos en sus formas clásicas. La ruptura final, factor insoslayable en la subversión del dominio de clase, sólo podía lograrse -en Chile- en términos de fuerza militar. La ausencia de aquella previsión y la incapacidad para sustituir oportunamente la estrategia equivocada, determina -en definitiva- el fracaso de la experiencia chilena. Si bien ésta demuestra cómo se puede alcanzar el gobierno y ganar la mayoría del pueblo; no logró -en cambio- demostrar cómo esa mayoría puede hacer respetar su voluntad, cuando está sin armas.

De otra parte, la fuerza social -indudablemente mayoritaria expresada por la UP, no tuvo aquel carácter «abrumadoramente superior», exigido por los dirigentes comunistas europeos.

LA ESTRATEGIA DEL MOVIMIENTO POPULAR

El capítulo histórico iniciado en septiembre de 1970, está caracterizado en última instancia por la resuelta voluntad de iniciar la construcción del socialismo.

En tal perspectiva, la UP determinó -en el plano de las definiciones estratégicas- la naturaleza del proceso iniciado, las fuerzas motrices que lo impulsaban; precisó los enemigos y señaló a partir del papel hegemónico de la clase obrera, la gama de sus aliados potenciales.

Asumiendo a plenitud las leyes generales de la transición al socialismo, el programa de la UP formuló con extrema claridad la condición medular del éxito del proceso: conquistar la totalidad del poder. Textualmente dijo: «Las

trasformaciones revolucionarias que el país necesita, sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.»

Insiste a continuación en que las fuerzas populares y revolucionarias se han unido «para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo». Finalmente señala como tarea fundamental del gobierno la de «trasformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder».
Tales afirmaciones están consignadas en el preámbulo del programa, bajo un título políticamente sugestivo: «El Poder Popular.»

La originalidad del proyecto político puesto en marcha en el verano de 1971, se definía en la trasformación del carácter de clase del Estado burgués sin su destrucción previa. En teoría, conquistado el más importante centro del poder político -el Poder Ejecutivo era posible copar progresivamente los otros poderes, modificando paulatinamente el carácter del Estado. Todo ello, sin quiebre violento, sin guerra civil, y como consecuencia natural, sin dictadura del proletariado.

La vía elegida -pacífica- estaba implícita en el programa. Las medidas a través de las cuales se construiría el nuevo Estado, se concebían en el respeto irrestricto al régimen jurídico vigente. Se sobrentendía que la institucionalidad chilena, suficientemente elástica como para modernizarse sin interrupciones violentas, en el curso de la larga evolución política y social del país, lo era también para generar en su seno la nueva institucionalidad socialista.

Sin embargo, el conjunto de la dirección revolucionaria, al aceptar la vía pacífica, no hacia profesión de fe en el comportamiento leal de los mecanismos democrático-representativos, hasta el extremo de considerarlos capaces por sí solos de tolerar la puesta en marcha de un proceso de trasformaciones revolucionarias.

A pesar de ello, en las esferas dirigentes de la UP se generó una confianza creciente en la factibilidad de «la vía chilena al socialismo, en pluralismo, libertad y democracia». En esta forma, una línea estratégica insuficientemente elaborada, expresión más de un deseo que de una concepción acabada, que ni siquiera señalaba las etapas y mecanismos tácticos que hipotéticamente la hicieran aplicable, adquiere consistencia teórica y científica.

Así, a contrapelo de todas las experiencias revolucionarias de los últimos cien años -desde la Comuna de París hasta nuestros días-, a despecho de las leyes generales del marxismo, y en abierta disposición voluntarista, se adhiere —algunos lo hacen con fe de carbonarios a un camino jamás antes transitado.

La posibilidad de avanzar con éxito por el camino político-institucional suponía la concurrencia de variados supuestos. Algunos eran reales y otros parecían serlo, pero en definitiva todos se disipan en la dinámica de la emergencia revolucionaria.

Diversos factores confluyeron para facilitar el triunfo electoral de la izquierda y el inicio consiguiente de la «vía chilena al socialismo». La singular evolución política y social del país, había franqueado el desarrollo de una vigorosa organización sindical y de sólidas organizaciones políticas, que expresaban nítidamente los intereses del movimiento popular, en el marco de un amplio régimen de partido; la convivencia política permitía el ejercicio real de la libertad de sectores significativos de la población; existía un sistema de elecciones libres y periódicas, con un alto nivel de participación, y un complejo sistema jurídico que, sin abandonar su esencia de clase, había incorporado las reivindicaciones más inmediatas de los trabajadores.

De otra parte, la institucionalización del conflicto social, en el contexto de los mecanismos arbitrales del Estado, había permitido, en el seno de las Fuerzas Armadas, el desarrollo de una ideología constitucionalista, que aparentemente las marginaba de la contienda social y del papel tradicionalmente desempeñado en defensa del status. Finalmente, configuran esta coyuntura favorable, el inmediato fracaso de un proyecto reformista; una situación internacional que alejaba la posibilidad de una intervención extranjera directa, y el factor subjetivo aportado por la conciencia política y revolucionaria de los sectores principales del proletariado y los campesinos.

La conquista del poder total a través de una vía pacífica, suponía sin embargo el mantenimiento de las condiciones antes referidas, y la concurrencia de otras nuevas, entendidas como partes integrantes del sistema político-institucional heredado.
La más importante, la de mayor incidencia en el éxito del proyecto, era la posesión del Poder Ejecutivo, concebido como el núcleo dominante del Estado, desde cuya extensa área de influencia se intentaría el «copamiento» progresivo del conjunto. La influencia atribuida al gobierno -en tanto expresión del Poder Ejecutivo- partía de una realidad constitucional, ratificada por la práctica política del último medio siglo. En Chile, desde 1925, existía un régimen presidencial. Al amparo de sus disposiciones jurídicas, era la voluntad del presidente de la República la que normalmente prevalecía en la solución de los conflictos con los demás poderes del Estado.

Independientes del gobierno, y con un área de poder menos significativa, estaban en teoría: un Parlamento amplio, flexible, con una dilatada tradición de diálogo y un Poder judicial justo y austero, aureolado de las más excelsas virtudes.

Por otra parte, facilitaban la vía escogida, la escisión de la burguesía y una clase media susceptible de ser atraída a un proyecto revolucionario, representada por un partido poderoso, en cuyo seno - en apariencia- gravitaba un

sector progresista. Finalmente, se esperaba un funcionamiento normal de la economía, sólo alterado, en períodos transitorios, por las desarticulaciones naturales producto del proceso trasformador.

Conquistado el Poder Ejecutivo, se suponía que lográbamos la parte más relevante del poder político, máxime si consideramos que a él estaba subordinado el aparato represivo militar. De ello cabía inferir la existencia de una especie de «dualidad de poderes» expresada en el interior del propio Estado. El sector estatal dependiente del Ejecutivo -teóricamente lo estaban las Fuerzas Armadas- respondía al interés de clase de los trabajadores, «contribuyendo a crear el embrión de lo que debe ser el régimen institucional de transición, correspondiente a la etapa de superación del sistema capitalista». El objetivo explícito era -desde aquí- controlar el resto del aparato del Estado.

La conquista del poder provendría así, no del desarrollo de un poder popular surgido «desde la base» para remplazar el Estado burgués, como lo señalaba el programa, sino de la adaptación progresiva del orden jurídico-institucional a las nuevas realidades introducidas por las trasformaciones socioeconómicas. Obviamente, nos referimos a los cambios que parecían factibles en el interior del aparato del Estado y no a la compleja estructura de poder que la reacción controlaba: el poder económico y financiero, la formidable red de comunicaciones de masas, televisión, prensa y radios, cine, el peso abrumador de su sistema ideológico, la Iglesia, las universidades. En fin, todo permanecía intacto, incluso el manejo del aparato represivo que continuaba siendo ajeno al gobierno que habíamos conquistado.

La práctica demostró, a poco andar, que la mayoría de estos supuestos naufragarían en el tempestuoso mar de una experiencia revolucionaria. Algunos tenían realidad y consistencia en tanto la burguesía era gobierno y servían a sus intereses. En una palabra, eran utilizables por ella, pero no contra ella.

El gobierno -esto es, el Poder Ejecutivo- era efectivamente «el punto de concentración» del poder del Estado, siempre y cuando el aparato burocrático militar no le fuera adverso. Al cuestionarse el sistema mismo, el Poder Ejecutivo devenía en prisionero de la estructura represiva-militar y se convertía de hecho, en un poder sujeto a interdicción.

La burguesía, parapetada en el Parlamento, y en el Poder judicial, trasforma de la noche a la mañana y por un simple juego de malabarismo político-jurídico, el régimen presidencial en régimen parlamentario. Los ministros, en teoría de confianza exclusiva del presidente, son acusados y depuestos a voluntad de las mayorías parlamentarias; se paraliza la acción legislativa del gobierno; se bloquean todas sus iniciativas; mientras los tribunales le dejan inerme frente al enconado ataque de sus adversarios. Al mismo tiempo, la burguesía utiliza sus enclaves en la burocracia estatal, en la Contraloría General de la República y en las Fuerzas Armadas para minar y debilitar su autoridad.

La legalidad, supuestamente utilizable contra la burguesía insurrecta, pierde su eficacia cuando ésta la abandona, y concluye -en cambio- por convertirse en «camisa de fuerza» de la revolución. La Constitución, los códigos y las leyes carecen de valor cuando la reacción -desde sus centros de poder- se reserva la facultad de interpretarlos a su amaño. Y se produce una situación por demás ridícula. El gobierno, atrapado en el compromiso impuesto por la vía elegida, no podía dar un solo paso fuera de la legalidad, en los mismos instantes que la oposición contrarrevolucionaria, autoconstituida en su garante, ubicaba todo el volumen de su ofensiva al margen de ella.

El ejército profesional, prescindente, democrático y constitucionalista de la primera hora, empieza pronto a descubrir su esencia clasista, consustancial al papel asignado en la sociedad capitalista. Primero, como aval de la burguesía contra cualquier presunta incursión del gobierno más allá de los límites del estatus; más tarde, como restaurador cruel y eficiente del dominio burgués imperialista.

A este hecho no es ajena la alteración burda y desvergonzada de las reglas del juego, impuestas por la burguesía, después del triunfo popular. Hasta entonces se había afanado en reservar al presidente de la República el carácter de «Generalísimo de las fuerzas de aire, mar y tierra». Posteriormente, el empeño se reorienta a asignarles a éstas un papel moderador y arbitral, que cuestiona incluso el ejercicio de las facultades presidenciales en materia de promociones y asignaciones de mandos.

Los hechos arrasaron igualmente con las esperanzas puestas en la división de la burguesía. Esta no pasaba de ser una querella familiar, superada en cuanto se hace evidente el peligro que el movimiento popular representa para el régimen. A su vez, las inclinaciones modernizantes de la clase media se agotan en las fronteras de la revolución. Apenas las trasformaciones empiezan a cuestionar el estatus, se ubican -en pie de guerra- junto a la clase hegemónica. De la misma manera, las presuntas «potencialidades revolucionarias» de la DC se esfuman frente al imperativo de asumir clara y francamente la representación de sus sectores burgueses monopólicos y de la pequeña burguesía, hostil al proceso.

Por último, la pretensión de que EU, por imposición de la coyuntura internacional, se vería forzado a tolerar una experiencia socialista, inaugurada al amparo y en el respeto a la democracia, deviene en ilusoria. La agresión desencadenada desde las primeras horas, desbarata de paso la posibilidad de un funcionamiento normal de la economía.

En esta forma, la vía pacífica al socialismo se desmoronaba en tanto se diluían sus supuestos: un régimen presidencial, que por voluntad de la burguesía había dejado de serlo; un ejército «neutral» y prescindente, que asumía su papel natural en defensa del estatus amenazado; un presidente de la República, constitucionalmente generalísimo de ese ejército, cuyas prerrogativas eran de hecho cuestionadas; un poder judicial justo y austero,

trasformado en madriguera de la reacción y en protector de sus demasías; una burguesía respetuosa del juego democrático, que se decide a dinamitarlo en el instante mismo en que siente amenazado sus privilegios de clase; y finalmente, EU, que lejos de sentirse inclinado a tolerar una experiencia al socialismo, en democracia y libertad, moviliza, desde el primer día, todo su inmenso potencial para aplastarla.

¿Cuáles debieron ser entonces los mecanismos empleados para conquistar el poder en el entendido de que aquellos supuestos hubieran realmente operado?

Para ello era indispensable acumular fuerzas, lo cual se estimaba posible a partir de la precisión clara de los enemigos fundamentales. En términos sociales se imponía una alianza con las capas medias, y en términos políticos debía articularse un entendimiento con el Partido Demócrata Cristiano, considerando su expresión mayoritaria.

En consecuencia, alcanzada una correlación de fuerzas favorables, se ganaría el Parlamento, que a su vez permitiría modificar radicalmente el ordenamiento jurídico, trasformando la Constitución burguesa en una Constitución socialista.

En términos operativos se trataba de obtener una mayoría capaz de reflejarse institucionalmente. Ello sólo era posible utilizando los mecanismos electorales regulares o recurriendo al expediente extraordinario del plebiscito. Todo el andamiaje teórico descansaba sobre estos supuestos prácticos. Era necesario aguardar hasta marzo de 1973, y ganar las elecciones parlamentarias de ese año, en términos absolutos. No obstante, existiendo una norma constitucional que disponía la renovación sólo parcial del Senado, ni siquiera con el 51% de los sufragios se lograba controlar efectivamente el Congreso. Era inevitable, entonces, esperar hasta la subsiguiente elección parlamentaria... marzo de 1977. (El PC alcanzó a formular un llamado a ganar las elecciones presidenciales de 1976.)

Pero si ésta era la alternativa factible o deseable, ¿cuál era nuestra quehacer durante estos siete años? ¿Qué programa aplicábamos? ¿Con qué mayoría gobernábamos? ¿Cómo se resolvían los dramáticos y urgentes problemas económicos? Para ninguna de estas interrogantes había respuesta. Quedaba en pie en esta circunstancia como opción exclusiva apelar a un plebiscito. Veremos que esta alternativa, defendida con insistencia por el Partido Socialista, es desechada en la única oportunidad verdaderamente factible, esto es, inmediatamente después de la elección municipal de abril de 1971.

La experiencia de la Unidad Popular llegó a ser considerada «el segundo modelo» para la construcción del socialismo. Éste, a diferencia del modelo tradicional, no pretendía la destrucción previa y violenta del viejo aparato burocrático militar, sino su remplazo pacífico y gradual. El propio presidente Allende, en el discurso pronunciado ante el Congreso Nacional el 21 de mayo de 1971, al inaugurar el período de sesiones ordinarias diseña esta perspectiva en los siguientes términos:

Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. Los escépticos y los catastrofistas dirán que no es posible. Dirán que un Parlamento que también sirvió a las clases dominantes es incapaz de trasfigurarse para llegar a ser el Parlamento del pueblo chileno. Aún más, enfáticamente han dicho que las Fuerzas Armadas, hasta ahora sostén del orden institucional que superaremos, no aceptarían garantizar la voluntad popular decidida a edificar el socialismo en nuestro país.

Nuestro sistema legal debe ser modificado -concluía. De ahí la gran responsabilidad de las cámaras en la hora presente: contribuir a que no se bloqueen las trasformaciones de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende en gran medida, que a la legalidad capitalista, suceda la legalidad socialista, conforme a las trasformaciones socioeconómicas que estamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos, que responsablemente queremos evitar.

Estas afirmaciones deben evaluarse en el contexto en el cual se formulan. El presidente de Chile se dirige -en ocasión solemne, 21 de mayo- a la mayoría reaccionaria del Parlamento, en presencia de las misiones diplomáticas acreditadas ante su gobierno, reiterando su respeto al sistema institucional vigente y su voluntad de que el proceso decurra sin quebrantamiento.

Por nuestra parte, pensamos que cualquiera que fuera el grado de confianza depositada en las posibilidades ofrecidas por las instituciones democrático-representativas-burguesas, existía la obligación ineludible de elaborar una línea estratégica alternativa, adecuada a las condiciones en cuyo marco, la burguesía -desde un comienzo- planteó la lucha.

Siendo el enfrenamiento racionalmente previsible desde un primer instante, y categóricamente insoslayable, avanzado el proceso -octubre de 1972— el problema de la vía retomaba una importancia medular. La ruptura final no estaba determinada por nuestra voluntad. Ni los sectores más inmaduros o insensatos de la izquierda lo planteaban como una opción deseable. Fue el imperialismo y la burguesía quienes desde la primera hora -aun antes de que Allende asumiera el gobierno- modificaron sus propios lineamientos estratégicos.

Fue un error entonces no haber considerado una alternativa en la previsión de un enfrentamiento, que el adversario resueltamente pretendía y -desembozadamente- preparaba. Aquí está el meollo. Todos los demás errores eran subsanables. La falla profunda, medular, es la pertinacia en sostener una vía recusada por el acontecer cotidiano. A la luz de la derrota del Gobierno Popular, queda en claro para las luchas revolucionarias

futuras la extraordinaria importancia que reviste la unidad política y direccional de la vanguardia, y por sobre todo, la unidad en torno a una línea estratégica. No bastan las convergencias tácticas, coyunturales o circunstanciales.

De las aseveraciones formuladas no debe inferirse un cuestionamiento de las formas pacíficas y legales de lucha, utilizadas para lograr el gobierno en 1970.

En el curso de los últimos veinte años, el Partido Socialista proclamó insistentemente su voluntad de emplear los recursos electorales brindados por la democracia representativa. Porque así lo entendimos, es que concurrimos a la formación de la UP desechando la alternativa irreal -propuesta por otras fuerzas de la izquierda- de constituir un «polo revolucionario», divisionista del movimiento popular.

Creímos y creemos que la institucionalidad chilena era legítimamente aprovechable por el movimiento revolucionario. Pero no en la perspectiva de completar un ciclo histórico hasta la construcción del socialismo, sino solamente en la de enfrentar desde posiciones de fuerza más favorables —políticas, sociales y militares- la ruptura del Estado burgués. Intentar transitar el camino político institucional sin tropiezos hasta alcanzar el objetivo final, era sólo una ilusión, una frágil ilusión.

El Partido Socialista, a partir del Congreso de Chillán en 1967, definió categóricamente su posición. El documento básico de aquel torneo señalaba:

El partido no desdeña la utilización de métodos pacíficos y legales, como las luchas reivindicativas, las tareas ideológicas, la actividad de las masas y los procesos electorales, etc.., pero considera que esos métodos no conducen por sí mismos a la conquista del poder, sino que son factores complementarios de su acción política sustantiva que busca la derrota definitiva de las fuerzas reaccionarias internas y la destrucción de toda forma de penetración imperialista. (Documento Político del XXII Congreso del PS, Chillán, 1967.

En el curso mismo del proceso el PS reiteró en innumerables oportunidades su escepticismo en la vía que con inexplicable contumacia -sobre todo después del paro patronal de octubre de 1972- se continuaba implementando. En marzo de aquel mismo año, en el Pleno celebrado en Algarrobo, nuestro Comité Central reafirmó una orientación clara y definida sobre su concepción estratégica y las perspectivas tácticas que le asignábamos al proceso en desarrollo. Con extraordinaria clarividencia y precisión insistimos:

El enfrentamiento es el problema central y básico de todo este período..., desde el 4 de septiembre de 1970 la lucha de clases ha desembocado en un «enfrentamiento permanente de clases» que tiende a agudizarse y a culminar en un conflicto armado..., la agresión armada del imperialismo y la burguesía se dará necesariamente en gran escala, comprometiendo toda su fuerza militar, social, económica, política e ideológica en una aventura en que se juegan definitivamente la última carta para el control del poder... La lucha entablada entre las fuerzas revolucionarias y la contrarrevolución por conquistar el poder, hace crujir toda la superestructura, agudiza la lucha de clases, decanta y obliga a definirse a todos los sectores sociales y políticos. En algún momento del desarrollo de este proceso estas tensiones necesariamente deberán desembocar en un enfrentamiento total de clases... La burguesía no resiste la aplicación de sus propias leyes por parte de fuerzas que le son enemigas. Todas las instituciones, los códigos y el aparato burocrático están hechos para asegurar el dominio de la clase burguesa y son eficientes mientras son manejados por los propios burgueses... son instrumentos de defensa del sistema en tanto están en manos de la burguesía... con ellos se puede destruir, pero no se puede construir... no están hechos para crear una sociedad socialista... No hay posibilidad de trasformación del sistema, sin quiebre, sin salto cualitativo, sin destrucción de la actual institucionalidad y la construcción de una nueva...

Finalmente decimos:

No podemos caer en la ingenuidad de creer que podemos construir el socialismo a través de las actuales instituciones y de las veinte mil leyes que existen. Sostener que la actual correlación de fuerzas puede dar lugar a un largo desarrollo, estable y tranquilo, no sólo es una ingenuidad sino que es una posición reformista y aventurera. Hay aventurerismo cuando se cree que la plenitud del poder político y el socialismo se conquistarán sin la necesidad de preparar ideológica, orgánica y materialmente a las masas... Las desviaciones reformistas en el seno del movimiento obrero, muchas veces han caído en estas irresponsabilidades aventureras, por más que se lancen los más feroces epítetos en contra del aventurerismo. Para los revolucionarios la solución no está en negar o esconder el objetivo de la toma del poder y del socialismo, sino en educar y preparar a las masas para lograrlo; si la revolución implica un tránsito violento en cualquier etapa, lo correcto no es negar la revolución a nombre del «menor costo», sino enfrentar la violencia organizadamente, que es la única forma de que el pueblo sufra menos y el costo social sea menor. (Informe al Pleno Nacional del PS, Algarrobo, marzo de 1972.)

Esta concepción reiterada del proceso chileno, dramáticamente confirmada por su desenlace, se repite, tanto en los torneos partidarios anteriores como posteriores al mencionado. Ella sintetizaba con absoluta claridad y realismo el pensamiento de la dirección y de las bases del socialismo chileno.

Sin embargo, preciso es reconocer que el Partido Socialista no estuvo en condiciones de desarrollar una política consecuente con aquellas previsiones. Su tradicional debilidad orgánica y la falta de formación de sus cuadros, no superadas al calor de la experiencia revolucionaria, le impedía implementar por sí solo una estrategia armada. No era, por cierto, el partido de Lenin. Estaba muy lejos de constituir una organización acerada, monolítica y disciplinada. No tenía experiencia alguna en la lucha clandestina ni dominio práctico de las formas de lucha armada. Esta deficiencia se hacía más relevante en el contexto de una combinación de partidos gobernantes,

cuyos acuerdos -adoptados por mayoría- siempre acató con lealtad, actitud no frecuente en la tradición política nacional.

En la certidumbre del asalto armado, resuelto por la burguesía y el gobierno de EU, el PS hizo cuanto estuvo a su alcance por conseguir la adopción de una estrategia que considerara la defensa militar del proceso. Era lo más que podía hacer. Ir más lejos, implicaba poner en peligro la unidad de la combinación gobernante y la estabilidad misma del régimen.

En tomo a las posiciones del Partido Socialista se han tejido no pocas imágenes distorsionadas. Sobre éstas la burguesía ha hecho su juego, presentando a nuestro partido como una organización con marcadas «desviaciones ultraizquierdistas» y «violentista seguidor del modelo cubano».

El análisis frío, objetivo y científico de la realidad concreta de Chile, llevó al socialismo a negar la posibilidad de la revolución pacífica, lo cual fue traducido como el deseo subjetivo y voluntarista de buscar y provocar a toda costa el enfrentamiento armado. Si el trágico epílogo histórico no hubiera venido en apoyo de sus justas previsiones esta distorsión aún persistiría.

EL ENFRENTAMIENTO INSOSLAYABLE

La burguesía y el imperialismo conspiraron desde la noche misma en que se anunció la victoria popular.

La CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado de EU, trabajaron la hipótesis de una victoria revolucionaria y analizaron las variantes de acción frente a ella con absoluto descaro. Así lo revelaron los documentos secretos de la ITT -entregados a la opinión pública mundial por el periodista Jack Anderson- en julio de 1971. Si algunos escépticos dudaron, han debido inclinarse cuatro años más tarde ante la aplastante ratificación del Senado norteamericano.

Cuarenta días después de la elección, es decir, cuando Allende aún no tomaba posesión de su cargo, se montó el primer dispositivo para anular la voluntad de las urnas. Las mismas fuerzas políticas que empujan a Pinochet en septiembre de 1973, intentaron ya la subversión en octubre de 1970. En ella estaban comprometidos nada menos que los comandantes en jefe de la Marina y de la Aviación, el jefe de la división de Santiago del Ejército de tierra y el director general de Carabineros.
Aquel conato subversivo fue la partida de bautismo del proceso. El golpe frustrado por el asesinato -no previsto- del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército, sella para siempre los términos de la lucha.

Desde aquel mismo instante se inició la marcha insurreccional de la burguesía. Ésta y el imperialismo articulan una ofensiva ininterrumpida, brutal e intimidatoria.

Las clases dominantes actuaron durante aquel período aplicando una inobjetable concepción insurreccional de masas. Todas las formas de lucha fueron utilizadas: las pacíficas y no pacíficas, las legales y las ilegales, las institucionales y las armadas. En el asedio constante al Gobierno Popular nada se dejó de lado. Mientras la burguesía insubordinaba los cuarteles, escandalizaba al mismo tiempo en el Congreso por el supuesto atropello de algún precepto legal. En los mismos instantes en que dinamitaba una torre eléctrica o algún gaseoducto, reclamaba con voz tonante, desde la Corte Suprema de justicia, el «quebrantamiento de la juridicidad», porque el gobierno no otorgaba la fuerza pública para el desalojo de alguna familia modesta. Con una mano asesinaba y saboteaba, en tanto con la otra suscribía declaraciones ampulosas y retóricas sobre la ruptura institucional. Manejaba los hilos del mercado negro y la especulación, al paso que protestaba airada por el caos económico. Alteraba el orden público, promovía huelgas subversivas, practicaba el terrorismo, con el mismo entusiasmo que bloqueaba el aparato estatal y obstruía desde el Parlamento las iniciativas del gobierno.

Frente a aquella ofensiva abrumadora, las fuerzas populares se parapetan en las trincheras del ordenamiento institucional. La fe en su solidez y en su capacidad autodefensiva parecían crecer, en la misma medida en que la burguesía lo abandonaba y mostraba su irrevocable disposición de destruirlo.

Inicialmente la acción del gobierno se orientó a asegurar la neutralidad política de los altos mandos castrenses. Preciso es reconocer que el presidente Allende manejó esta tarea con extraordinaria habilidad y con éxito cierto. No obstante, este factor pierde paulatinamente relevancia en la medida que la profundización del proceso, la aguda lucha de clases y la polarización política va minando la disciplina de las Fuerzas Armadas y diluyendo los restos de su ideología constitucionalista.

La certeza creciente del choque, en lugar de vertebrarse en torno a una estrategia adecuada, se traduce apenas en consignas voluntaristas como: ¡No a la guerra civil! Estas se estrellan contra la decisión ciega del adversario, y con la frialdad de las masas, quienes insistentemente reclaman la constitución de un poder popular y la entrega de armas.

Mientras tanto el gobierno sufría una evidente anemia de autoridad. La «vía chilena al socialismo» se había construido sobre el supuesto teórico de que el Poder Ejecutivo era el núcleo dominante del poder político. Efectivamente, así había sido hasta el día que la clase obrera llegó al gobierno de la nación. Sin embargo, intacto el resto del aparato del Estado, y permaneciendo el conjunto de la estructura coercitiva bajo custodia de la reacción, el Poder Ejecutivo se convertía en su prisionero. La preeminencia de éste, base presunta del régimen presidencial vigente en Chile desde 1830, salvo una corta interrupción, es paulatinamente socavada, entre un Parlamento que reclama mayores derechos y se atribuye muchas mayores facultades, y un Poder judicial que

hace virtual abandono de sus obligaciones, para convertirse en guarida conspirativa de la reacción alzada en armas. El efecto concreto de no ejercer el poder era simplemente perderlo.

VIABILIDAD DE UNA ESTRATEGIA ARMADA

Las posibles variables del enfrentamiento eran escasas: una acción que pusiera a la dirección revolucionaria a la ofensiva y que se anticipara al *putsch* reaccionario; un contragolpe, alternativa ofrecida el 29 de junio de 1973, con ocasión de un conato subversivo frustrado, y finalmente la resistencia armada, acompañada de una insurrección generalizada, en defensa del gobierno agredido.

Todas estas alternativas suponían contar con una fuerza militar, que articulara la movilización orgánica de un sector comprometido de las Fuerzas Armadas, con la existencia de un poder disuasivo en el seno de las masas y la movilización global de éstas, en defensa del gobierno.

Con todo, se mantienen los interrogantes: ¿Era posible implementar una estrategia armada en el curso del proceso? ¿Podía la clase obrera cambiar súbitamente de estrategia?

Debemos anticipar nuestra respuesta en términos escuetos y generales. Creemos aún no ha llegado el momento de dilucidar este tema en toda su amplitud. Ciertos elementos de juicio debemos mantenerlos en reserva en resguardo de su eventual utilización por la junta fascista.

Se ha sostenido desde diversas posiciones y con diferentes argumentos que esta alternativa estaba negada a los partidos populares; que no era posible a la Unidad Popular desplazarse tras la construcción de un poder armado capaz de garantizar el desarrollo de la experiencia. La línea argumentativa tiende a consignar como causas del escepticismo, precisamente aquellos factores que son efectos de la ausencia de una adecuada estrategia para el enfrentamiento: la ausencia o debilidad de un sector progresista en el ejército; la dificultad extrema para armar al pueblo a vista y paciencia de quienes tenían el «monopolio legal» de las armas; el carácter jerárquico, autoritario y disciplinado de la estructura castrense, hostil a toda tentativa de lesionar su unidad y su espíritu de cuerpo; la falta de una dirección única; los errores y vacilaciones de la Unidad Popular en torno a la movilización y participación de las masas en el poder y, finalmente, la existencia de una correlación de fuerzas internas e internacionales desfavorables a los trabajadores, sobre todo en lo que se refiere al terreno militar.

Desde otro ángulo ha sido realzado un factor de incuestionable gravitación : la ineptitud global de las Fuerzas Armadas para absorber y digerir una experiencia revolucionaria, hegemonizada por dos partidos marxistas-leninistas. Doctrinariamente, como cualquier otro ejército en América Latina, se formaron en la adhesión a un anticomunismo visceral, digerido en los centros de adiestramiento norteamericanos. No era extraño entonces que un sector importante de la oficialidad, desde sus particulares reacciones de clase, estuviera dispuesto a impedir que socialistas, y especialmente comunistas, tuvieran en sus manos la dirección del país. Igual, por lo demás, ha ocurrido en Europa. Hace apenas algunos meses el general norteamericano Haig, comandante en jefe de los ejércitos de la OTAN, notificó al mundo con extrema insolencia que: «los EU no pueden permitir la presencia de los partidos comunistas en los gobiernos europeos».

Nos parece, sin embargo, que más allá de las condiciones objetivas, eran las condiciones subjetivas las más difíciles de superar. No existía mayoritariamente, en el vértice direccional del proceso, una voluntad y una conciencia acerca de la necesidad de apelar a las formas de lucha armada en las instancias decisivas del proceso.

Al aceptarse el programa básico, el problema estratégico de la vía fue dejado de lado y nunca volvió a replantearse. Sólo seis meses antes del golpe militar, cuando a todas luces era insensato seguir ignorándolo, fue reformulado en el seno de la izquierda, aunque sin lograr un acuerdo básico.

Coincidimos plenamente en que las condiciones objetivas para la implementación de una línea estratégica armada, eran extraordinariamente difíciles en el contexto singular en el cual se generaba el gobierno popular.

Las tareas de preparar a las masas para la lucha armada; de articular un sistema defensivo; de crear aparatos paramilitares; de infiltrar y dividir a las Fuerzas Armadas, estaban plagadas de gravísimos obstáculos, acentuados en la medida en que el proceso adquiría un ritmo polarizante. Pero las tareas que tal estrategia suponía nunca dejaron de ser factibles, al menos hasta junio de 1973, cuando se malbarata la posibilidad cierta de asumir la contraofensiva, con ocasión del «Tancazo». Es en este instante cuando se agotan todas las variantes de acción del movimiento revolucionario, cuya suerte quedó sellada con la renuncia del general Prats a la jefatura del ejército.

Sobre las decisiones necesarias de adoptar en la implementación de una «política militar» insistiremos en el capítulo correspondiente. Por ahora deseamos dejar precisado nuestro pensamiento sin equívocos: el desarrollo de una estrategia armada en el curso del proceso, era muy difícil; diremos, extraordinariamente difícil; pero la vía pacífica, en cambio, en el Chile de 1970-1973 era imposible. Aún más, la facultad de optar entre una y otra nos fue prematuramente vedada. La burguesía y el imperialismo resolvieron el dilema en el instante mismo que asumimos el gobierno. El trágico epílogo de la experiencia chilena reivindica, al menos para nuestro continente, la plena vigencia de la Segunda Declaración de La Habana: «Allí donde están cerrados los caminos de los pueblos, donde la represión de los obreros y campesinos es feroz, donde es más fuerte el dominio de los monopolios yanquis, lo primero y más importante es comprender que no es justo ni es correcto entretener a los pueblos con la vana y acomodaticia ilusión de arrancar, por vías legales que no existen ni existirán, a las clases dominantes, atrincheradas en todas las posiciones del Estado, monopolizadoras de la instrucción, dueñas de todos los vehículos

de divulgación, y poseedoras de infinitos recursos financieros, un poder que los monopolios y oligarquías defenderán a sangre y fuego con la fuerza de sus policías, de sus aparatos de inteligencia y de sus ejércitos.»

5. LAS DIFÍCILES CAPAS MEDIAS

PRESENCIA POLÍTICA DE LAS CAPAS MEDIAS

Uno de los problemas más complejos y controvertidos dentro de la experiencia revolucionaria es el que versa sobre las llamadas «capas medias».

En teoría no se ha precisado con suficiente rigor conceptual qué debe entenderse por «capas medias». Está claro que los segmentos sociales que la integran no constituyen propiamente una clase, desde el punto de vista marxista, y también lo está, que ellas comprenden una variedad amplia y abigarrada de sectores socioeconómicos que oscilan entre las dos clases fundamentales: proletariado y burguesía.

Para nuestro objetivo, utilizaremos indistintamente los términos «capas medias», «pequeña burguesía» o «clase media», incluyendo en ellas los siguientes sectores de la sociedad: a) la pequeña burguesía no asalariada de la industria, el comercio, la minería y servicios (pequeños propietarios de medios de producción con empleo reducido de mano de obra ajena, propietarios de pequeños talleres y negocios, personas que viven de arriendos y pensiones, el minifundio en el área rural, los artesanos y trabajadores por cuenta propia) ; b) la pequeña burguesía asalariada -fundamentalmente del sector de servicios-, empleados, funcionarios, administradores y, en general, la burocracia estatal; c) capas intelectuales, en las cuales están insertos artistas, profesionales libres y técnicos, y d) los estudiantes.

Los sectores sociales referidos mantienen áreas de confluencia, tanto con la burguesía en el nivel superior, como con el proletariado en el nivel inferior. Incluso una reducida parte de la pequeña burguesía no asalariada tiende a desplazarse hacia el subproletariado.

En Chile, este complejo conglomerado social, fundamentalmente urbano, representa aproximadamente el 50% de la población activa del país. Este elevado porcentaje de sectores medios nos asimila a la estructura de clases de los países más desarrollados de la Europa capitalista.

Irrumpen en el proceso político, con peso definido, a partir de 1920. La elección presidencial de Arturo Alessandri, caudillo liberal populista, significa el comienzo del fin del Estado oligárquico fundado por Portales un siglo antes. Alessandri hace suyo un programa que en el contexto de la época adquiere una connotación avanzada. Tanto él como Carlos Ibáñez del Campo -caudillo militar nacionalista-, contribuyen a romper la hegemonía oligárquica, hasta entonces infranqueable, e integra a las masas pequeñoburguesas al sistema político.

Durante medio siglo (1920-1970) logran consolidar una fuerte estructura de privilegios relativos, concertando alianzas, indistintivamente con la burguesía y el proletariado. El perfeccionamiento de las funciones de bienestar público que asume el Estado, el desarrollo de la legislación laboral y las conquistas en el plano de la seguridad social, emergen de la convergencia de intereses comunes entre las capas medias y los sectores asalariados.

Caracteriza su deambular político su extrema versatilidad. Se identifican con un caudillo civil liberal como Alessandri, con el mismo fervor conque más tarde adhieren a un caudillo militar autoritario como Ibáñez. Durante quince años (1938-1952) asientan sus intereses en las asambleas del Partido Radical, para abandonarlo abruptamente y sumergirse en el difuso movimiento populista que coloca nuevamente -en 1952- a Ibáñez en la presidencia de la República. Agotada aquella experiencia y a partir de 1958 entregan su representación creciente a la Democracia Cristiana. Así ocurre hasta el instante en que el fascismo irrumpe en Chile.

La insurgencia de las clases medias en el escenario político, al promediar la tercera década del siglo, no es un hecho excepcional en el continente. El fenómeno corresponde a determinados estadios de la evolución política de algunos países latinoamericanos y surge con características un tanto similares en México, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.

El desarrollo industrial aparece condicionado en estos países -en buena medida- a la simbiosis de intereses de las viejas oligarquías terratenientes y mineras con las nuevas burguesías industriales emergentes.

Esta identificación y complementación de intereses, genera conflictos y contradicciones en el plano social, económico y político, los cuales -en definitiva- son resueltos a través de todo un complejo sistema, que sirve de asiento a la dominación oligárquico-burguesa.

Las burguesías industriales logran imponer su proyecto de desarrollo capitalista de la sociedad, a través de movimientos políticos y sociales en los cuales las clases medias juegan un papel de dirección sólo aparente. Es el caso del varguismo en Brasil; peronismo en Argentina; battlismo en Uruguay; Ibáñez y el Frente Popular en Chile. Estos movimientos, si bien recogen las aspiraciones reales de las clases medias, en última instancia expresan los intereses del naciente capitalismo industrial. Es éste el que orienta el curso principal de los acontecimientos, administra el desarrollo de la dependencia e impone a la pequeña burguesía, su proyecto de clase. Aquélla, incapaz de elaborar una alternativa propia, se limita a desplazarse tras la burguesía, tomando su partido cuando se agudiza el conflicto social.

En Chile, con la incorporación de la clase obrera a la dirección del gobierno en 1970, la pequeña burguesía pierde, en términos relativos, el papel político protagónico mantenido durante el último medio siglo. En el plano electoral se había expresado fundamentalmente en la candidatura demócrata cristiana de Tomic, y en menor medida, en la de Alessandri, así, de hecho, aparecía políticamente derrotada.

En el curso de la evolución social, se vinieron agrupando en torno a los partidos obreros, sectores cualitativamente importantes de capas medias. De hecho, el Partido Socialista, nace representando a la clase obrera, a los campesinos y a los estratos más pobres de la pequeña burguesía. Éstos jugaron un papel significativo en las luchas sociales de la época, estuvieron presentes decisivamente en los inicios del proceso revolucionario de 1970 y posteriormente, en instantes de extrema polarización de clase, desempeñaron un papel trascendente, resuelto y valeroso en defensa del gobierno constitucional.

La Unidad Popular no logra constituir -no obstante pretenderlo- una amplia alianza de clases entre el proletariado y las capas medias. Efectivamente, sectores pequeñoburgueses estaban insertos tanto en las dirigencias, como en la base de los partidos populares, pero ellos no representaban ni las aspiraciones profundas ni los auténticos valores de estas capas. El PR, en 1969, no obstante su decisivo aporte a la victoria electoral de 1970, expresa sólo los restos de su antigua y poderosa influencia en aquéllas. Los otros partidos (MAPU, Alianza Popular Independiente y Social Demócrata), a pesar de su valiosa presencia en el movimiento popular, tampoco asumen una representatividad social de magnitud tal, como para llegar a conformar una amplia alianza. Finalmente, la incorporación de la Izquierda Cristiana a la Unidad Popular, en julio de 1971, si bien expresa la adhesión de un contingente cualitativamente muy importante, carece de relevancia, en términos numéricos.

Como pretendemos probarlo, la presencia de sectores pequeñoburgueses -no desestimables- en el seno de la Unidad Popular y en su periferia de atracción, representaba la máxima contribución, dable de esperar de la pequeña burguesía, en la situación concreta de Chile en ese período de su historia; en el marco objetivo impuesto por las condicionantes de su evolución social y política; y la circunstancia de encontrarse el proceso hegemonizado por dos partidos proletarios y marxistas.

A la luz de esta realidad, resulta temeraria la afirmación de que en el curso del proceso los sectores medios habían retirado su apoyo a la UP. Este apoyo jamás existió en términos masivos. Ocurrió, sí, que paulatinamente abandonaron la actitud de neutralidad en la cual se encontraban en los inicios del Gobierno Popular, para situarse más tarde en franca oposición, casi histérica, a medida que el proceso avanzaba. En esta actitud influyó, por cierto, el comportamiento político de la cúpula demócrata cristiana, supeditada a determinados intereses imperialistas y a un sector de la burguesía monopólica nacional.

SU SISTEMA IDEOLÓGICO

En esencia, se trata de grupos sociales con escala de valores, aspiraciones y categorías culturales diferenciadas. Si bien -como lo hemos dicho- no constituyen una clase con intereses específicos y con un proyecto político autónomo, adquieren cierta homogeneidad y coherencia en lo que podríamos denominar «su propio sistema ideológico». Es decir, una particular concepción de la vida, un núcleo de motivaciones profundas y un conjunto de valores esenciales, que siendo distintos a los de la burguesía, están subordinados umbilicalmente a ella.

Algunos de sus componentes ideológicos entran en contradicción con el conjunto de los valores burgueses. La confrontación de las grandes desigualdades sociales lleva -por lo general- a las capas medias a asumir posiciones anticapitalistas y antioligárquicas y a protestar contra la opulencia y las grandes fortunas. Sin embargo, estas contradicciones aparecen mediatizadas y encubiertas por una unidad ideológica básica, fundada en su adhesión irrestricta al concepto «de propiedad» y al modo de vida burgués.

Reclama su participación en la distribución del poder político, cuya trasformación por otra parte rechaza. A partir de su aislamiento económico, idealiza un «Estado protector» por encima de las clases. Éste es «su Estado», el llamado a impedir su «descanso social», a satisfacer sus confusas aspiraciones de justicia, así como asegurarle la estabilidad, necesaria para el desarrollo de sus expectativas individuales.

La sobrevaloración del «prestigio social» les crea una suerte de complejo frente a la burguesía, al magnificar aspectos incidentales de la vida, a los que atribuye influencia en la determinación del estatus.

El sistema dominante les ha inoculado, paciente y científicamente, un cuadro artificial de expectativas, el cual les hace presentir su destino en peligro, frente a cualquier intento de cambio social. Sus aspiraciones se elaboran a partir de categorías básicas de «seguridad», «estabilidad» y «tranquilidad» en la perspectiva de la promoción y en el horror al descenso social. Todo ello, las lleva a adscribir global e irracionalmente, la concepción burguesa del «orden social».

Es este «corpus ideológico» el que alimenta un sentimiento de honda desconfianza hacia la ideología del proletariado, y ha internalizado en ellas el temor, y más que el temor, el odio visceral al comunismo, así como la percepción de una gravísima amenaza, en cualquier proyecto de trasformaciones revolucionarias.

Concretamente, en un país como Chile, penetrado intensamente por la ideología antisoviética y anticomunista exportada por el imperialismo y recogida y amplificada por la burguesía, se hacía extraordinariamente difícil y compleja la tarea de enunciar una política correcta. Importantes sectores de las capas medias, neutrales y expectantes en las primeras horas, se ubican -y no «por incapacidad de la dirección revolucionaria»- tras la línea divisoria, en cuanto presintieron la seriedad de las trasformaciones que empezaban a operarse. Muchos acceden a la perspectiva

del cambio, cuando éste se plantea como una categoría teórica, abstracta e intelectual, pero disipan su entusiasmo, cuando éste adquiere concreción en la praxis revolucionaria. Como en la vieja historia del Gatopardo, desean que «algo cambie para que todo permanezca igual».

INSUFICIENCIAS DE UNA POLÍTICA

A partir de esta realidad sociopolítica e ideológica, intentaremos responder las interrogantes originadas por la experiencia de la Unidad Popular, relativas a las capas medias. ¿Qué se entiende por una política correcta hacia los sectores medios? ¿Qué factibilidad de implementación tenía tal política una vez liberada la dinámica revolucionaria del proceso? ¿Era posible en Chile, dadas sus condicionantes históricas, una más amplia alianza entre el proletariado, los campesinos y la pequeña burguesía? ¿En qué condiciones?

Desde luego, una afirmación. Las clases medias en los países de capitalismo dependiente, en especial en América Latina, gozan de un estatuto de privilegios relativos. Su estándar de vida es sustancialmente superior al de las grandes masas pauperizadas de la ciudad y del campo. La brecha entre los niveles de vida de estas masas y los de gran parte de los intelectuales, empleados, la pequeña burguesía vinculada al comercio y al trasporte y la que actúa en la esfera de los servicios, es considerablemente mayor que la existente en países capitalistas avanzados. Esta particularidad dificulta objetivamente una alianza con el proletariado. Abierto un proceso revolucionario, el cual debe forzosamente imponer una distribución equitativa de los ingresos en beneficio de las grandes masas, el deterioro relativo de los sectores medios es casi inevitable.

La Unidad Popular tuvo una política hacia las clases medias. Una política más costosa que eficaz. El esfuerzo realizado estuvo orientado básicamente a satisfacer sus necesidades materiales. Diversas medidas, directas e indirectas, sirvieron para incentivar su adhesión al proceso: se aumenta su capacidad de consumo, se rebajan los intereses bancarios, se reorienta el crédito, se estabiliza el precio de las materias primas, se organizan cooperativas de pequeños mineros, se crean centrales de compra, asegurando abastecimiento a precios convenientes; se rebajan los tributos de los pequeños comerciantes e industriales; se extiende la previsión a más de 200 000 de ellos; se excluye a los técnicos de las disposiciones que limitaban los sueldos máximos en las empresas estatales; se permite su promoción -en las empresas nacionalizadas- a cargos antes reservados exclusivamente a los extranjeros; se amplía notablemente las posibilidades de educación de sus hijos, especialmente la universitaria.

Paralelamente, se intentó garantizarles que las trasformaciones proyectadas no afectarían sus intereses.

Fue esta una forma limitada, restringida y economicista, de entender la alianza de clases. Partió del supuesto teórico de que el apoyo político de estos sectores estaba en relación directa a la magnitud de los beneficios económicos y naturales concedidos. Los hechos demostraron los vacíos e insuficiencia de esta concepción. Los pequeños y medianos comerciantes, industriales, transportistas y profesionales obtuvieron ganancias inusitadas durante los dos primeros años del Gobierno Popular. Ello, sin embargo, no fue obstáculo para que importantes núcleos de estos sectores, promovidos, financiados e instrumentados por la contrarrevolución, se trasformaran en los adversarios más enconados y asumieran posiciones fascistas.

Es decir, la simple reiteración propagandística, en orden a garantizar el desarrollo capitalista de pequeños y medianos empresarios; la seguridad de que no serán expropiados sus activos ni reducidos sus márgenes de utilidades, no son suficientes.

Para la pequeña burguesía lo vital, lo verdaderamente trascendente, es el clima general en que se desarrolla el proceso. Las tensiones, las imágenes de caos y anarquía, la incertidumbre, la sensación de peligro, la inestabilidad económica, pesan mucho más en su ánimo, que cualquier declaración verbalista o medida legal orientadas a tranquilizarla. Les interesa por sobre todo su destino final: ¿Se mantendrá el sistema capitalista? ¿Serán afectados sus niveles y patrones de vida? De otra parte -les preocupa en forma principal-, la fuerza política que orienta y hegemoniza el proceso, ¿se trata de un partido pequeñoburgués reformista?, ¿de un líder carismático o populista? O lo que es verdaderamente temido: ¿Es el pueblo -son los obreros y campesinos- los actores principales?

En consecuencia, toda tentativa orientada a dar tranquilidad a las capas medias, si no está inserta en un proyecto de mucha mayor envergadura, profundidad y alcance, no producirá el efecto deseado. Iniciado un proceso de trasformaciones revolucionarias, cae en descrédito cualquier estatuto de garantías o régimen de inexpropiabilidad, destinados a asegurar la inmutabilidad de su condición. Si un gobierno reformista, como el de Frei, por ejemplo, garantiza a los agricultores la inexpropiabilidad de predios inferiores a determinada cabida, posiblemente le creerán. Saben que aquel gobierno -en definitiva- no cuestiona la esencia del régimen capitalista. Pero si la medida es planteada, a partir de una experiencia de trasformaciones profundas y radicales, cuya fuerza hegemónica son los partidos del proletariado, difícilmente creerán.

Quienes mostraban su sorpresa ante la violenta reacción de sectores cuyos beneficios económicos fueron ingentes, sin duda prescindían de sus motivaciones ideológicas íntimas. Su conducta no está determinada, lisa y llanamente, por el lucro: prefieren ganar menos con seguridad a ganar más con inseguridad.

Durante el Gobierno Popular se realizó un esfuerzo honesto para estabilizar -incluso jurídicamente- el estatus de la pequeña y mediana burguesía. El proceso debía afectar sólo ciento cincuenta empresas industriales consideradas monopólicas o estratégicas. Se entendía por empresa estratégica aquella que por su tipo de producción influía directamente sobre otros sectores esenciales. Esta definición no atendía ni a su dimensión ni a su capital. Con ocasión del paro de octubre de 1972, los trabajadores tomaron en sus manos la conducción de algunas

decenas de fábricas paralizadas por sus propietarios, no consideradas dentro de las anteriores. Aquel fue un acto político, moral y jurídicamente legítimo. No obstante, algunas de ellas fueron más tarde devueltas a sus dueños.

El resto, más de 30 000 empresas industriales, medianas y pequeñas, no fue tocado. Incluso, mucho antes del golpe se había concluido la elaboración de un estatuto estableciendo expresamente su inexpropiabilidad.

Lo mismo ocurrió en el sector agrícola, donde en definitiva se optó por hacer inexpropiables todos los predios menores de 40 hectáreas de riego básico.

Con ser justa esta política, prescindía de los mecanismos ideológicos que arrastran a las capas medias -hasta hoy invariablemente resistir los cambios. Son tributarias ideológicas de la burguesía. Forman parte integrante de su bloque hegemónico. En Chile, este proceso de subordinación se había fortalecido, precisamente, como consecuencia del notable ascenso del movimiento popular.

Estaban condicionadas ante un proyecto político, sobre cuya peligrosidad fueron insistentemente prevenidas a través de una formidable ofensiva de penetración ideológica, sostenida a lo largo de medio siglo, y abruptamente intensificado desde 1958. Bastó que la burguesía les deslizara en el oído: «¡Cuidado! Nosotros somos los primeros. Después les va a tocar a ustedes. Empezarán con el latifundio, seguirán con la mediana propiedad agrícola y concluirán con la pequeña. Hoy expropian las grandes empresas. Terminarán por estatizar hasta los talleres artesanales. Primero serán los monopolios de la distribución. Pero luego se tragarán todo el comercio. Así ha sido siempre, en todos los países socialistas. Así es en la Unión Soviética, en China, en Cuba. De modo que defendámonos juntos.. .» Y se defendieron juntos. Avanzado el proceso, hasta el más modesto almacenero se sentía en la obligación de protestar por el intento de estatizar el poderoso monopolio industrial del papel o del cemento.

La existencia de esta suerte de soldadura ideológica de la pequeña burguesía con la gran burguesía y los valores difundidos por Estados Unidos, hace esquemática la afirmación de quienes sostienen que -en el campo de las trasformaciones revolucionarias- si se individualiza a los enemigos fundamentales (en Chile: el imperialismo, los monopolios y los terratenientes), se establece mecánicamente el área de los amigos. Son numerosos y variados los factores que entran a terciar: la dinámica del proceso, el carácter de la fuerza dirigente, el contexto histórico en que se desenvuelve, el peso ideológico de la burguesía, el nivel de desarrollo de la sociedad, especialmente su estructura de clase, el grado de dependencia del imperialismo, los analogismos históricos. Pero sobre todo, la entidad del «universo ideológico» de la pequeña burguesía.

Creemos que en Chile, después de 1970, la única política factible para tranquilizarlas e incorporarlas hipotéticamente a una alianza históricamente trascendente, era mediatizar la experiencia, hasta reducirla a un intento reformista más. En esta línea debíamos nacionalizar los grandes intereses norteamericanos, cancelando «justas y aceptables» indemnizaciones; limitar la socialización a sólo algunas pocas empresas monopólicas; implementar una reforma agraria moderada; estabilizar económicamente el país y limar todas las expresiones agudas de lucha de clases. Y por sobre todo, debíamos haber impedido la presencia masiva del pueblo en la dirección del gobierno y de la economía, liquidando el control obrero en las grandes empresas, su participación en la dirección de las industrias, disolver los consejos campesinos, los comandos comunales, los cordones industriales, y por cierto, como tranquilizante supremo, desahuciar la participación comunista en el gobierno y reprimir violentamente «el extremismo». En otras palabras, en las condiciones históricas concretas en que nos encontrábamos, la condición última del compromiso era la renuncia a la revolución.

En torno a esta situación se plantea un problema de la mayor importancia teórica y practica.

Las contradicciones existentes entre la pequeña burguesía y la burguesía, han ido perdiendo fuerza en el transcurso del tiempo, frente a la extraordinaria consistencia del bloque ideológico burgués imperialista.

Un pequeño propietario agrícola, en la Rusia de los zares, podía fácilmente concurrir a una alianza contra los terratenientes, toda vez que la red de explotación de aquéllos le era claramente perceptible. El pequeño agricultor chileno de 1970, no visualiza, dado el sistema de dominación ideológica del cual forma parte, al terrateniente como su principal enemigo, y por el contrario, ve en el proletariado y en su proyecto histórico, a su verdadero y definitivo adversario.

En otras palabras, aquellas contradicciones que antes se expresaban en términos reales y asequibles, hoy aparecen mediatizadas bajo el impacto de ese «sistema ideológico», cuyo objetivo muy preciso es adormecer la conciencia, para que no perciban esas contradicciones. En la misma medida que el mundo adquiere un carácter más ecuménico, más universal, en que se detecta con nitidez la existencia de la «gran pugna» entre socialismo y capitalismo, en que las fuerzas a nivel mundial se polarizan, todo suceso internacional empuja al hombre medio a una toma de posiciones, que dentro de las áreas de dominación ideológica del imperialismo opera en forma casi mecánica. Por ejemplo, en Chile no era claramente detectable, por el conjunto de las capas medias, la existencia de contradicciones insuperables con el imperialismo norteamericano; en cambio, sí estaban dispuestas a creer en supuestas y gravísimas contradicciones con la Unión Soviética o Cuba.

LA PEQUEÑA BURGUESÍA Y EL GOBIERNO POPULAR

Sin duda, el Programa Básico de la Unidad Popular no era contradictorio con los intereses objetivos de las capas medias asalariadas y no asalariadas. Por el contrario, establecía con bastante claridad el marco de los intereses que iba a afectar Si nos limitamos sólo a cuantificar los enemigos fundamentales, concluiremos que ellos representaban sólo una minoría ínfima del espectro social. Algunas pocas empresas norteamericanas, doscientas empresas

monopólicas y estratégicas y no más de seis mil terratenientes. Pero aquí radica el quid del problema. Es precisamente esta pequeña minoría, esta ínfima minoría, la que ejerce su dictadura institucional y sobre todo ideológica sobre el vasto y heterogéneo conglomerarlo pequeñoburgués e incluso sobre sectores importantes del proletariado, los campesinos y las masas marginales de la ciudad y del campo.

Indudablemente, el comportamiento agresivo de las clases medias frente al Gobierno Popular guarda relación directa con la profundidad y extensión del proceso revolucionario. Aunque las trasformaciones emprendidas las favorecieron, objetiva y persistentemente, en definitiva, visualizaron en la supresión del capital monopólico y en el proyecto de cambio social, una amenaza a su propia existencia y a los valores de vida burgueses que presiden su comportamiento.

Sus mecanismos de seguridad funcionaron automáticamente, en cuanto accedió al gobierno una combinación política, en la cual gravitaban un Partido Comunista, «obsecuente servidor de la línea soviética», y un Partido Socialista, «violentista seguidor del modelo cubano».(1) En ellos vislumbraron la amenaza de destrucción de un régimen social, que las encandila con un cuadro de expectativas tan brillantes como ilusorias. En este orden de ideas, no cabe duda, habrían resistido a Allende - «presidente marxista»- y a la Unidad Popular - «combinación de partidos marxistas»- aun cuando se les hubiera ofrecido el más moderado de los programas reformistas. Tal era la magnitud de la desconfianza. Tal la hondura de sus temores y prejuicios.

No basta entonces el hecho de no estar objetivamente amenazadas. Es necesario que subjetivamente no se sientan amenazadas. Las capas medias, en Chile y en el resto del mundo capitalista, son parte integrante del bloque ideológico de la burguesía, están soldadas a él, y en modo alguno se sienten partícipes de la misión histórica del proletariado. Destruir este bloque, romper esta soldadura tan compleja y persistente, constituye sin duda uno de los desafíos de mayor trascendencia que enfrenta el movimiento revolucionario contemporáneo. Este problema no es ajeno a las nuevas posiciones que asumen los partidos comunistas de Europa occidental. En torno a él se ha abierto un amplio debate político y sociológico y se ha generado una profusa literatura analítica.

En Chile, la tarea de enfrentarlo resultaba todavía más ardua. A más del «corpus» de motivaciones íntimas, comunes a todas las clases medias, se agregaba el peso de una campaña ideológica que las había predispuesto frente a «los propósitos diabólicos» del Gobierno Popular: en último término, toda forma de propiedad sería liquidada, las libertades aherrojadas, impuesto el totalitarismo marxista, la dictadura del proletariado, los tanques soviéticos entrarían en Santiago y sobrevendría el desabastecimiento, el hambre, la anarquía social, el desorden y la inseguridad.

Todas las poleas de transmisión ideológica de la burguesía y de EU habían machacado con enervante regularidad sobre estas imágenes distorsionadas. No era -en consecuencia- «la incapacidad de la dirección revolucionaria» la causa determinante de la estampida de la mayor parte de la pequeña burguesía, en instantes de extrema tensión social, de aguda polarización de clases y de crisis revolucionaria.

Con todo, la experiencia chilena obtuvo un formidable éxito. En 1970 ganamos la elección presidencial con el 36.3% de los votos. En 1971 nos empinamos sobre el 50% y en marzo de 1973 -en medio de una violenta crisis económica- logramos el 44%. Las cifras son aún más elocuentes. En septiembre de 1970, la UP obtuvo un millón de votos; en abril de 1971, un millón cuatrocientos mil; y en marzo de 1973, un millón seiscientos cincuenta mil sufragios. ¿ Se puede atribuir entonces a la incapacidad de la dirección revolucionaria el no haber logrado una alianza más amplia? ¿Es que en otro país han concurrido las capas medias junto a la clase obrera para clausurar el poder económico y político de la burguesía o para traspasar el poder de la clase dominante al pueblo? ¿Se ha logrado -tal vez- en algún lugar, aglutinar en torno a los partidos obreros, un bloque social que represente a más del cincuenta por ciento de la población? ¿Acaso en Italia? Durante treinta años los comunistas italianos han venido desarrollando un esfuerzo extraordinariamente lúcido y coherente para romper la «hegemonía» de la burguesía y lograr un «compromiso histórico» con la DC. Indudablemente han conseguido avances muy significativos. Pero hasta la fecha no ha sido posible concretar una alianza estable, ni siquiera con el PS, partido que de algún modo representa a importantes sectores pequeñoburgueses.

Igual ha ocurrido y ocurre en Francia, España, Portugal y Grecia. En los países de América Latina la situación es aún mucho peor. «La amplia alianza» postulada insistentemente por los partidos comunistas permanece, hasta ahora, sólo como categoría deseada.

Toda la literatura revolucionaria y política advierte con rara unanimidad sobre el carácter versátil, oscilante y oportunista de las capas medias. ¿ Por qué entonces sorprenderse de lo ocurrido en Chile? ¿ Por qué atribuirle una incidencia tan importante a los excesos -torpes por cierto- en que incurrieron algunos sectores de la extrema izquierda? ¿ Es que la responsabilidad del ultrismo resuelve el problema de fondo?

En más de algún análisis precipitado del comunismo chileno se ha llegado a responsabilizar al «izquierdismo» por la fascistización progresiva de algunas capas de la pequeña y mediana burguesía. Tal afirmación prescinde absolutamente de la esencia ideológica reaccionaria de las clases medias y de su comportamiento histórico. Alemania se nazificó sin la presencia de extremistas. Mussolini y Franco fascistizaron Italia y España sin que esos grupos tuvieran mayor relevancia en las convulsionantes experiencias vividas por esas naciones. Son, pues, motivaciones más profundas y complejas las que determinan el comportamiento de las capas medias, y que en Chile, impidieron un compromiso social y político con ellas. Tal entendimiento sólo ha sido posible en coyunturas muy excepcionales. Por ejemplo, en las guerras populares de liberación, donde la lucha por la independencia nacional se identifica con la lucha por el socialismo, y donde la estructura de clase era muy diferente a la que existe en Chile, Argentina, Italia o Francia.

¿Cuál entonces es la política adecuada frente a las capas medias?

El empeño por atraerlas se hace básicamente viable en la medida que se accione con éxito sobre sus mecanismos psicológicos. Toda política debe orientarse a minar sus fijaciones y prejuicios. Más allá de excitar sus egoísmos y de satisfacer sus aspiraciones materiales, se trata de integrarlas en un gran proyecto de vida. Pero ello es extraordinariamente complejo y requiere de un proceso largo. Implica un esfuerzo de extrema latitud, destruir en la conducta cotidiana, en los hechos más que en las palabras, las imágenes pacientemente inoculadas. Sin embargo, a esa alternativa llegamos tarde. No era factible en el tráfago de una experiencia convulsionada, que había liberado en el pueblo todo su potencial revolucionario y rebasado los objetivos esquemáticamente prefijados.

Por otra parte, en la elaboración de cualquier política correcta hacia las clases medias, no puede prescindirse de un factor puesto en diáfana evidencia en Chile: la existencia de una autoridad real y efectiva.

La experiencia universal es uniforme. Por esencia vacilantes, se definen invariablemente en función de un polo de autoridad. Si éste no existe, cualquier intento de persuasión está condenado al fracaso. La pequeña burguesía valora en alto grado el ejercicio de la autoridad, del orden y la disciplina, en la misma medida que es hostil a su ausencia, a la inseguridad y a la anarquía.

Su resistencia al proceso revolucionario fue tanto mayor cuanto percibió que éste no estaba afianzado en un poder real, en una autoridad efectiva. Si la experiencia chilena hubiera contado con una dirección revolucionaria, única, centralizada y homogénea, expresión convincente de la fuerza y organicidad de la clase obrera y del campesinado, de su decisión de lucha y de la voluntad del gobierno de hacerla respetar irrestrictamente, pudimos atraer un contingente mayor del sector más tradicional de las capas medias -pequeños empresarios, pequeños comerciantes y transportistas- e incluso, neutralizado al sector moderno tecnocrático -profesionales, técnicos, supervisores. En otras palabras, el diálogo sólo era factible desde posiciones de fuerza.

Una política para ser eficaz —sobre todo frente a las clases medias- exige disponer de fuertes elementos coercitivos, de la sólida evidencia de que existe una fuerza real, potencialmente utilizable, que puede y debe ser flexible, pero sobre cuya determinación de emplearla no quepa duda alguna. Sin la existencia de esa autoridad, las concesiones, el diálogo y cualquier tipo de transacción, son percibidas como signos de debilidad y no socavan la consistencia del bloque dominante.

(1) Conceptos de Patricio Aylwin, en carta dirigida a Radomiro Tomic el 6 de mayo de 1975, que expresan el pensamiento de un sector importante de la pequeña burguesía chilena y sobre todo del Partido Demócrata Cristiano.